



República de Colombia
Republic of Colombia

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INTERNATIONAL COOPERATION STRATEGY

Presidencia de la República
Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional - ACCI

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidency of the Republic
Colombian Agency
for International Cooperation

Foreign Affairs Ministry



República de Colombia
Republic of Colombia

Estrategia de Cooperación Internacional

International Cooperation Strategy

Presidencia de la República
Agencia Colombiana
de Cooperación Internacional ACCI

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidency of the Republic
Colombian Agency
for International Cooperation

Foreign Affairs Ministry



República de Colombia
Republic of Colombia

Álvaro Uribe Vélez
Presidente
President

Carolina Barco Isakson
Ministra de Relaciones Exteriores
Foreign Affairs Ministry

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal
Director (e)
Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional ACCI
Director (a.i.)
Colombian Agency for International
Cooperation

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



Índice

	Página
Presentación	<u>5</u>
I. Introducción	<u>7</u>
II. Antecedentes de la Cooperación Internacional en Colombia	<u>9</u>
III El Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006: Hacia un Estado Comunitario	<u>13</u>
IV Orientaciones Generales para la Cooperación Internacional	<u>21</u>
V. Declaración de Londres	<u>31</u>

INTERNATIONAL COOPERATION STRATEGY




Index

	Page
Presentation	<u>35</u>
I. Introduction	<u>37</u>
II. Background of International Cooperation in Colombia	<u>39</u>
III The National Development Plan 2002 - 2006: Towards a Community State	<u>43</u>
IV General Orientation for International Cooperation	<u>51</u>
V. London Declaration	<u>61</u>

El presente documento tiene como finalidad, exponer la estrategia de cooperación internacional del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo fundamento se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, y los objetivos que lo conforman: brindar seguridad democrática, renovar la administración pública e impulsar la reactivación económica y la equidad social; además de invitar a la comunidad internacional a fortalecer la coalición internacional que viene trabajando por la paz de Colombia, a través del apoyo decidido y concreto de la propuesta de cooperación que se detalla en este documento.

Para este efecto, el documento presenta, en primer lugar, un breve diagnóstico sobre la situación de violencia y pobreza en el país, posteriormente, detalla el papel que ha cumplido la cooperación internacional a lo largo de los últimos años en la solución de estos problemas, antecedentes que se tienen en cuenta en la formulación de la presente estrategia, y a continuación se describen los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo, a partir del cual se plantea a la comunidad de donantes, una propuesta de cooperación

encaminada a mejorar las condiciones de vida de los colectivos sociales menos favorecidos, así como de aquellos más afectados por la violencia, resaltando el gran esfuerzo nacional en la consecución de estos fines y los avances principales, que a diciembre de 2003 se han dado en relación con éstos.

Por último, reseña las orientaciones generales que el Gobierno colombiano ha previsto en materia de cooperación internacional desde el inicio de su período, con énfasis en los temas presentados en la reunión del BID en Milán en el año 2003, en la Reunión Preparatoria de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional, celebrada en Londres el 10 de julio del mismo año y en los seis ejes temáticos priorizados y concertados, a partir de esta reunión, que se constituyen en la propuesta de Colombia a la comunidad internacional para orientar la cooperación en el país. 

I. INTRODUCCION

Hasta los primeros años de esta década, Colombia evidenció el recrudescimiento de la violencia, que se desplazó territorialmente como consecuencia de la creciente asociación entre las actividades de los grupos armados al margen de la ley, la producción y comercialización de drogas ilegales y la delincuencia común, además de la debilidad del Estado para prevenir y controlar el impacto de estas acciones. Los vínculos de los grupos armados irregulares con el narcotráfico aceleraron el crecimiento del área afectada por los cultivos ilícitos y proporcionaron junto con la funesta industria del secuestro y la extorsión, una fuente abundante y estable de financiación, que les ha permitido incrementar su pie de fuerza y expandir las actividades militares.

La violencia se convirtió en el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país y ha ocasionado una grave destrucción del capital humano y social, y una preocupante emigración. Su incremento afectó cada vez más la productividad de la economía, al tiempo que redujo la capacidad del gobierno para contrarrestar la creciente pobreza e inequidad que experimentan millones de colombianos. De igual manera, ha limitado el desarrollo de las organizaciones políticas y sociales, constituyéndose en la mayor barrera para la profundización de la democracia.

Hoy en Colombia la acción de los violentos es también el obstáculo principal para el desarrollo humano. Entre sus víctimas se destacan las poblaciones desplazadas y los grupos más vulnerables como jóvenes y menores de 18 años, que son objeto de reclutamiento por parte de los grupos ilegales. También son gravemente

afectadas las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como las minorías políticas, los movimientos sociales y sindicales, los alcaldes, concejales, ex combatientes, maestros, defensores de derechos humanos, personal de salud y población civil en zonas de confrontación armada.

Para el gobierno es claro que la recuperación de las regiones afectadas y deprimidas implica mucho más que desarrollar programas de emergencia. Requiere un proceso de fortalecimiento institucional que permita reconstruir las relaciones Estado – comunidad, sienta las bases para la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la dinámica de desarrollo, invierta en revertir el daño ambiental y recupere la cultura de la convivencia pacífica.

El Gobierno de Colombia ha asumido con compromiso y determinación los retos que impone este contexto. Pero también es consciente que los esfuerzos de la sociedad y del gobierno no serán suficientes si Colombia no cuenta con el respaldo decidido de la comunidad internacional, bajo los principios de corresponsabilidad y solidaridad entre las naciones que orientan la agenda internacional.

Con el interés legítimo de fortalecer una Coalición Internacional por la Paz de Colombia, se plantea en este documento una propuesta que facilite la generación de mayores niveles de cooperación para el país, así como maximizar la coordinación, articulación y trabajo de socios con las fuentes cooperantes, de tal suerte que el apoyo internacional se constituya en complemento y soporte necesario para superar los problemas estructurales que enfrenta la Nación. ◆◆◆

II. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA

La Ayuda Oficial al Desarrollo en Colombia, inicia en la década de los cincuenta con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca - TIAR, y en los sesenta con la Alianza para el Progreso y la Misión Colombia del Banco Mundial.

El Primer Convenio Marco de Cooperación Bilateral data de 1962 con Estados Unidos y en 1968 se crea el Departamento Nacional de Planeación y en su estructura la División Especial de Cooperación Técnica Internacional, DECTI, como ente encargado de la coordinación en el ámbito nacional. Adicionalmente, en 1992, según decreto 2126, se crea la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de orientar la política en materia de Cooperación Internacional. En el año 1996 se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI, que en la actualidad se encuentra adscrita a la Presidencia de la República.

Colombia entiende la cooperación internacional bajo el concepto de “desarrollo humano sostenible” que pone de presente las nociones de capital humano y social, la gestión del desarrollo, la participación de la sociedad civil y el cuidado del entorno.

Los objetivos de la cooperación internacional en Colombia desarrollan los principios del Comité de Asistencia al Desarrollo CAD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, privilegiando el trabajo de socios con las fuentes cooperantes, la conformación de programas, el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos, la

coordinación nacional y el empoderamiento tanto de las instituciones como de las comunidades.

Es importante anotar que el comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD- en Colombia en los años 80, se caracterizó por mantener niveles relativamente constantes en un promedio cercano a los US\$ 60 millones al año. (Esta cifra, y lo que se desarrolla en este documento, no incluye cooperación recibida por el país en materia de fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía por parte de la comunidad internacional).

En ese periodo y principios de la década de los años 90, se implementaron diversas estrategias mundiales o nacionales, entre ellas, el Plan de Acción Forestal para Colombia, el Programa de Agua Potable y Saneamiento, el Plan Ambiental para Colombia, los desarrollos de la Cumbre de Río 92, (GEF, Global Environmental Facility, Protocolo de Montreal, Ramsar, Cumbre de Desarrollo Sostenible, etc), el Plan Pacífico y la movilización en torno al Quinto Centenario del descubrimiento.

Por iniciativa del Presidente Virgilio Barco y desarrollado durante el Gobierno del Presidente Gaviria, para mitigar los efectos de la lucha contra el narcotráfico, se presentó a la comunidad internacional el Plan Especial de Cooperación para Colombia - PEC. Este programa, conformado por alrededor de 120 proyectos elaborados por entidades públicas y privadas, distribuidos en aproximadamente 9 áreas, fue apoyado en su diseño por el PNUD y presentado a las fuentes cooperantes en el año 1989, y trajo como resultado un incremento en los niveles de cooperación cercano al 50% anual.

En la década de los años 90, Colombia fue clasificado como un país de desarrollo medio, con lo cual dejó de ser un país de concentración de la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, la comunidad internacional continúa acompañando decididamente los esfuerzos de Colombia para enfrentar las situaciones generadas por la violencia, la producción y el tráfico de las drogas ilícitas, la vulneración de los derechos humanos y el deterioro del medio ambiente.

Durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana se inició la ejecución del *Plan Colombia*, una estrategia integral diseñada para consolidar en el mediano y largo plazo condiciones de reconciliación, paz y desarrollo social, mediante la implementación de cuatro componentes complementarios: (1) Proceso de Negociación del Conflicto Armado; (2) Estrategia Antinarcoóticos; (3) Recuperación Económica y Social; (4) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social.

Para la ejecución del *Plan Colombia* se estimaron recursos del orden de US\$7.500 millones, de los cuales US\$4.000 serían aportes nacionales y US\$3.500 estaban previstos como aportes de la comunidad internacional. A diciembre de 2002 se comprometieron US\$5.610 millones, lo que representa un 75% de lo programado. De estos recursos, US\$ 3.981 corresponden a esfuerzo fiscal colombiano, y los restantes US\$ 1.628, a cooperación no reembolsable de la comunidad internacional.¹

Es preciso mencionar que para el desarrollo del cuarto componente “Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social”, el Gobierno de Colombia contó con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro del

marco del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz, que se reunió sucesivamente en Madrid (julio 7 de 2000), Bogotá (octubre 24 de 2000) y Bruselas (abril 30 de 2001). Tras llevar a cabo estas tres Mesas, los anuncios hechos por la comunidad internacional como apoyo al Gobierno de Colombia ascendieron a US\$ 1340.5 millones.

Del total de los recursos, US\$ 690.6 millones correspondieron a cooperación no reembolsable, es decir, el 51.5 % del total de los anuncios. Específicamente, Estados Unidos anunció US\$ 370 millones de dólares de cooperación no reembolsable, siendo el 53.5 % del total de los anuncios de cooperación². Por su parte, la Comisión de la Unión Europea y sus países miembros anunciaron US\$ 227.2 millones, siendo el 33 % del total.

Los recursos restantes, del orden de US\$ 650 millones, correspondieron a créditos ofrecidos por diferentes países y organismos multilaterales, siendo el 48.5% del total de los anuncios.

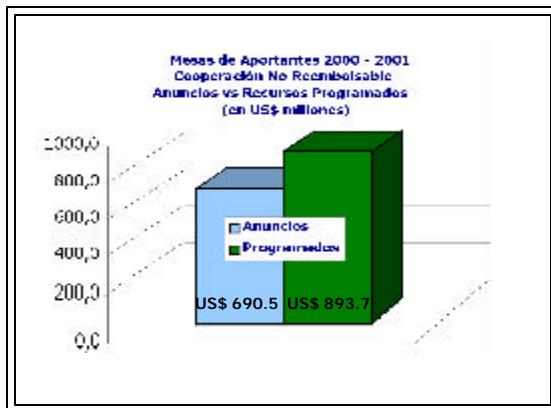


1. Fuente: Plan Colombia, balance 1999 - 2003 - DNP.

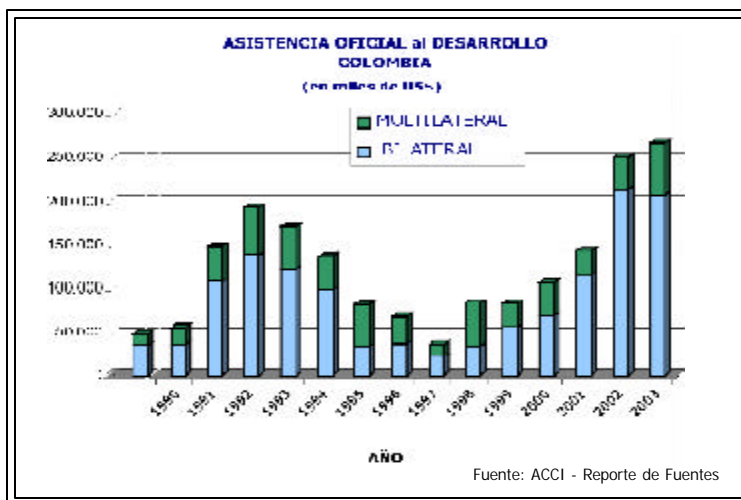
2. No se incluye el valor de la cooperación otorgada por el gobierno de los Estados Unidos en el componente de Lucha contra el Narcotráfico).

Se hace necesario aclarar que la mayoría de los países programaron sus anuncios a través de su cooperación regular durante este período, bien sea que ésta haya sido definida conjuntamente con el Gobierno a través de comisiones mixtas o reuniones de negociación, o haya sido programada directamente por cada donante a través de ONG.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional considera que la cooperación internacional es un instrumento para fortalecer las relaciones de Colombia con otros países en desarrollo, razón por la cual se ha dado especial importancia a la cooperación horizontal, que pretende aprovechar nuestra experiencia para encontrar soluciones a problemas comunes en el mundo en desarrollo y fortalecer la capacidad técnica de las instituciones nacionales.



Según las cifras reportadas por los países y organismos internacionales en el año 2001, se incrementaron los desembolsos efectivos en un 36% con respecto al año anterior y en el 2002, en igual relación, se incrementaron en un 74%; en el 2003 el aumento fue de 7%. Esto se explica por el inicio en la ejecución de programas con Estados Unidos y la Unión Europea.



III. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002 - 2006: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO

El Gobierno Colombiano a través del Plan Nacional de Desarrollo busca construir un “Estado Comunitario”, concebido como un Estado participativo que involucra a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales; un Estado gerencial que invierte con eficiencia y austeridad los recursos públicos; y un Estado descentralizado que privilegia la autonomía regional con transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria.

El Estado Comunitario no tolera la corrupción, ni coexiste con la violencia cualquiera que sea su fin. Realiza inversión social con resultados y promueve la solidaridad en las decisiones públicas y privadas. Impulsa la creación de un país de propietarios donde todos sean dueños y responsables tanto de su hogar, como del destino que le den al mismo. Busca que la inversión pública conduzca a la generación de empleo productivo, y trabaja para la eliminación de la excesiva burocracia y la politiquería.

Para avanzar hacia la construcción de este Estado, el Plan de Desarrollo y los esfuerzos del Gobierno Nacional están enfocados hacia tres objetivos fundamentales:

A. BRINDAR SEGURIDAD DEMOCRÁTICA:

Para el gobierno del Presidente Uribe, sin seguridad no hay democracia, pero tampoco crecimiento ni equidad. Sin seguridad, el Estado no puede avanzar en su fortalecimiento y restauración. Con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la libertad

de la población, proteger los derechos humanos e impulsar la prosperidad económica y la equidad social, el Gobierno Nacional ha implementado un modelo integral de Seguridad Democrática que le permita al Estado recuperar la autoridad y el control del territorio con criterios de legitimidad, legalidad y gobernabilidad.

La Seguridad Democrática comprende el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. Así entendida, la Seguridad Democrática trasciende el concepto tradicional de seguridad ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos individuos que transgreden las normas de convivencia en sociedad. En última instancia, la política de Defensa y Seguridad Democrática busca la construcción de un orden social que proteja y beneficie a todos los ciudadanos en sus diferentes espacios y ámbitos, asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del Estado.

La seguridad será democrática para proteger a todos: al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor.

La violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que afronta Colombia. La sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no sólo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la Nación.

Entre 1990 y 2000 los grupos subversivos duplicaron el número de hombres. La violencia se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país y ha ocasionado grave destrucción del capital humano y social, y una preocupante emigración. Su incremento ha afectado cada vez más la productividad de la economía.

Por esto, el Gobierno del Presidente Uribe considera que sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y no puede haber futuro.

Para proteger a la población, asegurar la infraestructura económica y la red vial nacional, restablecer la autoridad de las instituciones democráticas y generar condiciones de desarrollo sostenible en el territorio nacional, la Seguridad Democrática propone una intervención integral y articulada del conjunto del Estado, con el concurso de la sociedad, mediante la cual se contenga, desarticule y disuada a las organizaciones armadas ilegales, y se forje un círculo virtuoso de recuperación, mantenimiento y consolidación del control territorial, de larga duración y con cobertura nacional.

Los resultados en el año 2003 confirman que las condiciones son propicias para que se de un cambio favorable en la situación del país:

- Se logró un descenso del secuestro en cerca de un 26%, de los retenes ilegales de un 45%, y del homicidio en un 23% - la tasa más baja de los últimos 15 años- . Los ataques terroristas bajaron en un 49% y los ataques a las poblaciones en un 83%. Cada vez más hombres y mujeres abandonan las organizaciones terroristas, desilusionados por

el maltrato que sufren en ellas y la criminalización de éstas. Cerca de 4.125 hombres y mujeres ya lo han hecho, una cifra muy superior a la de años anteriores e incluso a las alcanzadas con las desmovilizaciones de los procesos de paz a comienzo de la década pasada.

- Es importante anotar que todas las acciones para recuperar seguridad se han adelantado en plena observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno ha destinado importantes esfuerzos para fortalecer la institucionalidad y las acciones tendientes a evitar nuevas violaciones a los derechos humanos de la población colombiana. Entre otros aspectos, se puede citar que a partir de noviembre de 2002 se creó el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas para centralizar la respuesta del gobierno y hacer efectivo el Sistema de Alertas Tempranas SAT. Por su parte el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas - CIAT, ha recibido, tramitado y atendido 89 informes de riesgo sobre cerca de 150 municipios, de los cuales 38 informes se han considerado como alertas tempranas.

AVANCES 2003

Descenso del secuestro en cerca de un 26%, de los retenes ilegales en un 45%, y del homicidio en un 23% - la tasa más baja de los últimos 15 años- .

Los ataques terroristas bajaron en un 49% y los ataques a las poblaciones en un 83%.

Se ha realizado la mayor asignación de recursos en la historia por \$34,000 millones para el programa de protección de defensores de derechos humanos. Se aprobó y puso en marcha el Plan Nacional de Acción de Minas Antipersonales.

En el 2003 se redujo en 50% el número de familias desplazadas; 11.143 familias desplazadas retornaron a sus lugares de origen entre agosto de 2002 y diciembre de 2003, y en este mismo periodo de tiempo se ha prestado asistencia humanitaria a 46.328 familias. El Gobierno Nacional dio especial énfasis a la reconstrucción de municipios y viviendas afectadas por ataques terroristas; se han entregado obras en 129 municipios y reconstruido 5.857 viviendas.

Aunque continúa siendo muy grave el asesinato de sindicalistas, éste ha descendido en un 68%. Se han profundizado las acciones en materia de prevención a las violaciones de DDHH mediante la ejecución de un proyecto de descentralización en 16 municipios, y la adopción de nuevas medidas mediante la Directiva 09 del Ministerio de Defensa, relativa a atención y protección a los defensores de DDHH y los sindicalistas.

Por su parte, los resultados obtenidos contra el negocio de las drogas ilícitas también son muy positivos. En el primer año de esta administración se ha logrado una importante reducción de los cultivos ilícitos en el territorio nacional, se incrementaron las incautaciones de cocaína (109 toneladas) y de insumos para el procesamiento de este alcaloide, así como un 40% más de insumos líquidos y un 60% de insumos sólidos. Adicionalmente, la nueva ley de extinción de dominio permite atacar a las

organizaciones del narcotráfico en su punto más vulnerable: sus bienes y sus finanzas.

Sin duda, la férrea decisión del Gobierno que ha contado con un importante apoyo y respaldo de la cooperación internacional en su desarrollo, así como la cada vez mayor participación de la ciudadanía que ansía un cambio radical en materia de seguridad, se han constituido en un factor decisivo para alcanzar resultados tan importantes como los que se registran en este período.

AVANCES 2003

Se redujo en 50% el número de familias desplazadas; 11.143 familias desplazadas retornaron a sus lugares de origen entre agosto de 2002 y diciembre de 2003.

Se ha prestado asistencia humanitaria a 46.328 familias.

Se han entregado obras en 129 municipios y reconstruido 5.857 viviendas.

B. RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno del Presidente Uribe adelanta una política que busca incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, a través del fortalecimiento de la participación ciudadana en la definición, ejecución y vigilancia de las tareas públicas.

Para esto, se han incorporado conceptos y prácticas de gerencia moderna para la gestión de las entidades públicas, lo mismo que un rediseño de éstas y unas reformas transversales a todas las entidades. Por otra parte se ha avanzado en la descentralización de las entidades regionales y locales para lograr mayores y efectivos niveles de autonomía territorial y mejor gobernabilidad.

Colombia requiere seguridad democrática, volver a crecer, generar empleo y repartir mejor los frutos del crecimiento. Para que ésto sea posible, se requiere una profunda renovación del Estado, que implica una reforma integral: a la política, a la justicia y la Renovación Administrativa propiamente dicha, concebida como un proyecto de largo alcance.

El programa no escapa de los postulados del Estado Comunitario, entendido como aquel al servicio del ciudadano, por lo cual, parte de conceptos tales como una nueva cultura de administración de lo público (un Estado gerencial, productivo, austero) un Estado en donde la participación ciudadana es indispensable en la definición, ejecución y vigilancia de las tareas públicas, y en donde la descentralización debe ser piedra angular, pues se parte del reconocimiento de la capacidad de los entes territoriales para asumir de manera más adecuada las funciones evitando la duplicidad de competencias entre el Gobierno central y los entes territoriales.

El Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) está dirigido a todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, por medio de la ejecución de reformas verticales y de reformas transversales.

Las primeras tienen que ver con las acciones que cada Ministerio o entidad de la rama ejecutiva del orden nacional adopte en su interior, y las segundas son de alcance multisectorial, es decir, que incumben a todos los ministerios y a todas las entidades y cuyo objetivo es superar, o al menos sentar las bases irreversibles para superar, algunos problemas estructurales de la administración pública.

Al terminar el 2003 en desarrollo de las reformas verticales PRAP, 89 entidades se han rediseñado (fusión, supresión, escisión, reestructuración y cambios de adscripción). Estos decretos ya han sido expedidos y, una vez termine su ejecución, dichas acciones reportarán ahorros brutos, antes de liquidaciones, indemnizaciones y reconocimiento económico, de 480.614 millones de pesos para el cuatrienio; se suprimirán 17.223 puestos de trabajo, de los cuales 11.482 corresponderán a funcionarios desvinculados y 5.741 contratos de prestación de servicios.

De estas decisiones tomadas en desarrollo del PRAP, se han ejecutado operaciones que implican un ahorro bruto (antes de indemnizaciones y reconocimientos económicos) al presupuesto nacional de \$234.513 millones de pesos y un total de 8.711 puestos de trabajo menos.

Es política del actual Gobierno implementar "reformas con sentido social", razón por la cual, el PRAP ha desarrollado una estrategia que busca mitigar el costo social del programa que se ha denominado PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL (PPS).

Todas las reformas transversales a diferencia de las verticales, son reformas de largo plazo, razón por la cual la velocidad en la definición de hechos cumplidos es también de largo plazo, en algunos casos se prevé que pueden exceder incluso el presente Gobierno, caso en el cual se espera que las bases planteadas en desarrollo del PRAP sean suficientemente sólidas para mantener, de esa forma, los logros en el tiempo.

C. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EQUIDAD SOCIAL

El Gobierno viene impulsando el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo bajo un ambiente de estabilidad macroeconómica garantizando la sustentabilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana a los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales.

Para ello, se privilegian programas de impulso a la vivienda y la construcción, el desarrollo de inversiones en infraestructura física y el impulso a la explotación y exploración de hidrocarburos y minería. Por otra parte, y para asegurar la sostenibilidad del crecimiento, se vienen adelantando acciones gubernamentales de promoción en materia de ciencia, tecnología e investigación, lo mismo que la implementación de una política de competitividad y fomento a la productividad de la industria nacional.

De igual forma, el Gobierno está comprometido con una estrategia social integral que conduzca a avanzar hacia la construcción de una sociedad más equitativa, en un país con 27 millones de personas en condiciones de pobreza. Para ello está impulsando el Plan de Reactivación Social, con el cual se pretende hacer realidad la política social del Estado y sentar la bases para la

construcción de una sociedad más equitativa. Este plan consta de siete herramientas, que son; 1- Revolución educativa, 2- Protección y seguridad social, 3- Impulso a la economía solidaria, 4- Manejo social del campo, 5- Manejo social de los servicios públicos, 6- Lograr un país de propietarios, 7- Calidad de vida urbana.

Gracias a esta decisión del Gobierno, al terminar el 2003, se registran hechos importantes: En materia educativa, se amplió la cobertura y mejoró la calidad de la educación básica y media; la creación de 477.598 nuevos cupos representa una ampliación de la cobertura bruta, que pasó de 83.2% a 86.3% entre 2002 y 2003, ésto representa el 31% del total de la meta gubernamental. Adicionalmente se han creado 34.858 nuevos cupos para educación superior; se han aplicado 1.042.058 pruebas para medir la calidad de la educación impartida en 1.065 municipios y se han creado, reactivado y fortalecido bandas musicales en 95 municipios, junto con la incorporación de 5.000 niños desplazados al Programa Batuta (Orquestas infantiles).

AVANCES 2003


En materia educativa, se amplió la cobertura y mejoró la calidad de la educación básica y media; la creación de 477.598 nuevos cupos representa una ampliación de la cobertura bruta, que pasó de 83.2% a 86.3% entre 2002 y 2003, ésto representa el 31% del total de la meta gubernamental para el periodo.

En cuanto a la cobertura de los programas de protección social para los grupos poblacionales más vulnerables se registra un incremento notorio. La tasa de desempleo se redujo entre octubre de 2002 y octubre de 2003 de 14.7% a 13.6%, se generaron más de 650.000 empleos en el año 2003. Se afiliaron más de un millón de nuevas personas al régimen subsidiado de salud, para un total, en la actualidad, de 11.722.200 afiliados del total de 13.600.000 que se quiere lograr al año 2006. En el régimen contributivo de salud se alcanzó una cobertura de 13.459.179 afiliados, se entregaron 337.414 subsidios del programa Familias en Acción a hogares del nivel 1 del Sistema de Identificación de Beneficiarios SISBEN, con el fin de mejorar la retención escolar y la nutrición infantil, lográndose así superar la meta planeada para el cuatrienio que estaba en 325,000 familias.

La construcción de una economía solidaria tuvo importantes avances. Actualmente 5.226 madres comunitarias (8% de la meta para los años 2003-2006) se encuentran en proceso de inducción al cooperativismo. 5.434 microempresarios, de un total de 10.345 que se tienen planeados capacitar hasta el año 2006, en 25 minicadenas productivas, se han beneficiado de microcréditos por un valor total de \$7.469 millones de pesos. En el 2003, por medio del crédito asociativo para el campo se beneficiaron 19.536 pequeños productores. En materia agrícola se han recuperado e incorporado a la producción, 159.000 nuevas hectáreas. Se han asignado 9.370 subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda rural y se han firmado contratos para la recuperación y conservación de ecosistemas tropicales con 20.000 familias campesinas de un total de 50.000 familias que tiene planeado incorporar el Gobierno Nacional.



A pesar de los ingentes esfuerzos y las medidas recientes para aumentar los ingresos fiscales - a través de políticas de ajuste, nuevos y mayores impuestos, políticas de reducción de gastos de funcionamiento y focalización del gasto social, - el Estado colombiano no dispone de los recursos económicos suficientes para desarrollar en su totalidad todos los objetivos propuestos. Por esta razón se requiere la comprensión de la comunidad internacional y su compromiso decidido para profundizar su apoyo de tal suerte que complemente el esfuerzo nacional en materia de las prioridades establecidas para la construcción del Estado Comunitario.

La estrategia que se propone a continuación, que comprende varias iniciativas encaminadas a reducir y eliminar el impacto de la violencia en la población civil, desborda el tiempo de este Gobierno y se plantea como una Política de Estado que congrega a toda la población colombiana en la construcción de la paz. Los pasos ya emprendidos en esa dirección han sido concebidos en función de una amplia alianza con la sociedad civil, los actores políticos y la comunidad internacional. 

IV. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La estrategia de cooperación internacional del Gobierno pretende fortalecer la coalición internacional que viene trabajando por la paz de Colombia, permitiendo un mejor entendimiento y participación de la comunidad internacional en los procesos de cambio de la realidad colombiana, mejorar la cooperación internacional que recibe el país, incrementar el flujo de recursos y ampliar el espectro de la ayuda internacional que se recibe, al hacerla complementaria con otras formas de apoyo y financiamiento para el desarrollo, como lo son el comercio y la inversión justa, la reducción de los avisos de advertencia a turistas a visitar el país y la aprobación de visas, entre otros.

Esta estrategia tiene como fin la búsqueda de la paz, el fortalecimiento del Estado y la Sociedad Civil, el desarrollo humano sostenible y la asistencia humanitaria, y se fundamenta en el interés legítimo del Estado Colombiano por coordinar la ayuda internacional hacia la solución de los problemas estructurales que enfrenta la Nación, y apunta a avanzar en tres dominios:

- **Calidad:** La cooperación internacional se concentrará alrededor de un conjunto de prioridades temáticas, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” y buscando que sea focalizada, ágil, concreta y flexible, y con un impacto directo sobre la comunidad.
- **Cantidad:** Colombia requiere un apoyo decidido y concreto de la comunidad

internacional que se refleje en un incremento de los aportes de la cooperación oficial y que dé cuenta de la difícil realidad y la complejidad de los desafíos que vive el país y complemente los grandes esfuerzos que adelanta el Gobierno en favor del desarrollo y la paz.

- **Articulación con el sector privado:** La ayuda oficial al desarrollo que recibe el país, debe apalancar otras formas de apoyo y financiamiento como lo son la inversión y el comercio justo, el turismo y la vinculación de cooperación de fundaciones del sector privado. Se pretende potenciar el rol del sector privado colombiano, que se destaca por su aporte al desarrollo, tanto por la inversión efectuada en los diversos sectores productivos, como por las acciones filantrópicas, que en los últimos cuarenta años lo han caracterizado por ser el de mayor actividad en términos relativos en el contexto latinoamericano. En este orden de ideas, contar con la experiencia acumulada de la filantropía empresarial colombiana resulta fundamental para la ejecución de la cooperación internacional en Colombia.

Sobre la base de las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente Uribe planteó a la comunidad internacional a comienzos de su administración una propuesta de cooperación encaminada a mejorar las condiciones de vida de las personas menos favorecidas, así como de las más afectadas por la violencia.

En tal sentido, el Presidente señaló diversas líneas de actuación, sobre las cuales invitó a la cooperación internacional a concentrarse. Fue así como el Gobierno de Colombia presentó en la **Reunión Anual del BID en Milán**, celebrada en marzo del 2003, varias líneas:

- Familias Guardabosques
- Programa de Microcrédito
- Programa Nacional de Lectura y Bibliotecas
- Programa Nacional de Música para la Convivencia
- Programa de Atención Humanitaria

No obstante, estas iniciativas no colmaron las expectativas de los países donantes y en tal sentido el Gobierno inició un amplio proceso de concertación a efectos de lograr la consolidación de una estrategia, que además de responder a las necesidades nacionales, encontrase una respuesta favorable de la comunidad internacional.

a. Reunión Preparatoria de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional

En la Reunión Preparatoria de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, celebrada en Londres el 10 de julio de 2003, el Gobierno Colombiano presentó el documento “Una coalición internacional por la paz de Colombia”.

Dentro del marco de esta reunión, todos los representantes gubernamentales “expresaron su apoyo al Gobierno de Colombia en la lucha contra la violencia relacionada con el conflicto y contra la producción y tráfico de las drogas ilegales, subrayando la necesidad de hacerlo respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y cuando tenga aplicación, el derecho internacional humanitario”.

Como resultado de este encuentro, “acordaron revisar y reorientar sus programas de cooperación, con el énfasis particular de contribuir al fortalecimiento de las instituciones

estatales, al alivio de la crisis humanitaria, a la protección de los derechos humanos y de las actividades ambientales y el desarrollo de alternativas a la producción de drogas”.

Tras haber tomado atenta nota de las prioridades del Gobierno en estas áreas, “acordaron estudiar cómo hacer más efectivos sus programas de cooperación, a la luz de la situación actual de Colombia, con miras a la realización de una conferencia de donantes en una fecha que resulte oportuna para el Gobierno de Colombia y para la comunidad de donantes”.

b. Plan Post Londres

Como consecuencia de la Reunión Preparatoria de Londres, la comunidad internacional se comprometió a revisar y reorientar sus programas de cooperación con miras a la realización de la Mesa de Coordinación y Cooperación.

En una primera fase se vienen realizando las acciones tendientes a ordenar la demanda de cooperación con la participación de las respectivas entidades nacionales, generando espacios de diálogo y concertación con la sociedad civil y con las representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia. El resultado de esta labor son los documentos de propuesta para cada uno de los ejes temáticos definidos, a saber:

- Bosques,
- Paz y reincorporación,
- Desarrollo productivo y alternativo,
- Fortalecimiento del Estado de Derecho,
- Programas regionales de desarrollo y paz, y
- Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria.

Por su parte, el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, en actitud proactiva ha generado una importante dinámica de coordinación y articulación como resultado de la Reunión de Londres, que ha facilitado la interlocución periódica y constructiva con las autoridades nacionales. Se ha constituido el denominado G-24 (conformado por los representantes de todos los gobiernos y agencias de cooperación que participaron en la Reunión de Londres)³, y a su vez, de éste se ha constituido el G-10 como grupo técnico.⁴

Es importante señalar, que el BID viene ejerciendo la Secretaría Técnica del proceso de preparación, realización y seguimiento de la Mesa. En tal sentido, entre otros aspectos, el BID ha ofrecido un equipo de expertos para acompañar al Gobierno en la elaboración de las propuestas programáticas que se pondrán a consideración de la comunidad internacional.

c. Los Ejes Temáticos Priorizados

En el documento “Una coalición internacional por la paz de Colombia”, presentado en la Reunión de Londres, el Gobierno colombiano propuso a la comunidad internacional siete áreas prioritarias de cooperación para el país a la luz de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en torno de las cuales se desarrollaría la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional.

3. Argentina, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Federal de Alemania, Suiza, Suecia, Comisión Europea Europea. Para conocer los asistentes a la Reunión de Londres, ver la Declaración de Londres en el capítulo V de este Documento.

4. Conformado por representantes de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, España, Países Bajos, Italia, Brasil y México.

Luego de diversas consultas con entidades nacionales y fuentes cooperantes, la demanda colombiana en la Mesa se ha concentrado en torno de seis bloques temáticos que vienen siendo construidos bajo la coordinación de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El propósito es que las propuestas se nutran de un diálogo fluido con diversos sectores de la sociedad colombiana y de los entes territoriales, para lo cual, con el concurso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las instituciones nacionales mantienen consultas con los actores sociales. La mecánica de trabajo de esta consulta varía según el bloque temático.

Es importante destacar que la construcción de estas propuestas ha estado orientada además por el conocimiento de los intereses estratégicos de los oferentes de cooperación en su acompañamiento tradicional a Colombia. En efecto, se han desarrollado reuniones con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país (Embajadores y Directores de Agencias de Cooperación), en las cuales se han discutido las orientaciones temáticas y políticas sobre las cuales se viene trabajando.

Esta dinámica será permanente con el objeto de lograr una mayor coordinación y articulación con los donantes, así como la negociación de los programas que vienen siendo construidos y desarrollados que se presentan a continuación:

1. Bosques

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha querido darle una mayor relevancia al desarrollo forestal del país, y está empeñado

en promover este sector como uno de los pilares del nuevo desarrollo en el campo.

El Gobierno ha definido la política en esta materia, orientada a promover las plantaciones forestales y la reforestación protectora, entre los principales aspectos que pretende generar oportunidades de empleo y de ingresos para las poblaciones en el campo, y así afianzar a las comunidades rurales en sus territorios.

En este sentido, el compromiso del Gobierno Nacional con todos los sectores involucrados en la gestión forestal del país, está orientado a consolidar a Colombia como un país con vocación forestal, promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS) en todo su territorio y en todos los ecosistemas forestales y fortalecer su institucionalidad pública y privada en la materia.

El eje central de esta estrategia, es el apoyo y la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) que incorpora los lineamientos y acciones consignadas en los principales acuerdos internacionales sobre bosques, en particular, aquellos alcanzados en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Gobierno Nacional viene desarrollando el programa Familias Guardabosques, cuyo objeto es apoyar a familias de comunidades localizadas en ecosistemas estratégicos o áreas de conservación y protección, con presencia o en riesgo de ser afectadas por los cultivos ilícitos, para que consoliden proyectos de vida acordes con los principios democráticos que orientan el progreso económico y social en Colombia, brindándoles una alternativa legal de ingresos. El programa se centra en el diseño y puesta en marcha de estrategias asociadas con el uso

alternativo productivo, protección, recuperación, revegetalización y/o conservación de las áreas pertenecientes a las veredas de las familias beneficiarias del programa, en una perspectiva de desarrollo regional.

A partir de este programa se espera que las familias guardabosques no sólo cuenten con una alternativa de ingresos diferente de aquella proveniente de los cultivos ilícitos, sino que además identifiquen las oportunidades y potencialidades productivas de sus territorios, para que con el apoyo de la cooperación internacional pongan en marcha proyectos y estrategias de uso y manejo sostenible del bosque, que además contribuyan a la construcción de capital social en estas poblaciones.

La propuesta de cooperación en esta materia se ha estructurado en torno de los tres ejes temáticos del PNDP:

- Ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales;
- Promoción de cadenas forestales productivas;
- Desarrollo institucional.

Para tal efecto se identifican las siguientes líneas de cooperación:

- Apoyar la consolidación y creación de programas dirigidos al mejoramiento de calidad de vida de los pobladores de los bosques a partir de la conservación y uso sostenible de éstos. En particular, se busca que la cooperación técnica internacional coadyuve a consolidar los resguardos indígenas, las propiedades colectivas de las comunidades negras y las iniciativas campesinas en materia de manejo sostenible de los bosques.

- Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones públicas y privadas encargadas de administrar, conservar y fomentar el uso y aprovechamiento sostenible del bosque natural y plantado.
- Promover la creación de instrumentos financieros para la consolidación del PNDP, relativos a uso y aprovechamiento sostenible del bosque natural, del plantado, así como la valoración de servicios ambientales, incluido la captura de CO₂ y el manejo forestal sostenible
- Apoyar la consolidación de la estrategia nacional de biodiversidad en el marco del PNDP, en especial, lo concerniente al aprovechamiento sostenible de productos no maderables.
- Apoyar la formulación de un Plan Nacional de Investigación Forestal, con énfasis en biotecnología forestal, mejoramiento genético de las especies, optimización de tecnologías para el aprovechamiento sostenible del bosque.
- Apoyar el desarrollo de un Programa Nacional para la Creación de una Cultura Forestal.
- Apoyar programas dirigidos a pequeñas y medianas empresas para implementar una estrategia de actualización y modernización tecnológica de transformación de la madera.
- Apoyar la consolidación del sistema de información forestal, orientada a planificar, dirigir, tomar decisiones, y formular políticas coherentes que permitan consolidar el PNDP como política de largo plazo.

- Facilitar el desarrollo de programas orientados a promover la zonificación y ordenación de ecosistemas forestales; la conservación y restauración de bosques tropicales, y de prevención y control de incendios forestales.

- Facilitar el intercambio de experiencias que faciliten el desarrollo de inventarios forestales, promuevan el manejo comunitario de bosques, consoliden esquemas empresariales y de tecnologías de punta orientadas a optimizar procesos de utilización y transformación del bosque.

EJES DE LA PROPUESTA DE COOPERACIÓN EN MATERIA FORESTAL

**Ordenación, conservación y
restauración de ecosistemas
forestales;**

**Promoción de cadenas
forestales productivas;**

Desarrollo institucional.

2. Paz y Reincorporación

El Gobierno Nacional viene trabajando en la implementación de una estrategia encaminada a ofrecer las garantías necesarias para que los actores armados al margen de la ley, se desmovilicen y reincorporen de manera individual y/o colectiva a la vida civil. Para ello se trabaja en las áreas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y se busca garantizar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo, se promueve la cultura de paz, convivencia, reconciliación y solución pacífica de

conflictos. Igualmente se adelantan acciones tendientes a promover la desmovilización y reconstruir la identidad ciudadana del desvinculado, al tiempo que ofrece modelos de atención y de reincorporación adecuados a las particularidades de la población objeto, de manera que pueda acceder a los recursos disponibles del Estado y a la oferta institucional de servicios de salud, educación y capacitación, generación de empleo y trabajo productivo. Asimismo se fomenta el pluralismo y la participación ciudadana, como elementos determinantes para facilitar la recuperación de la gobernabilidad y la legitimidad en estas poblaciones.

Esta propuesta establece las características y condiciones particulares para que la comunidad internacional pueda ser participe de los procesos y programas establecidos para que las poblaciones menores de edad y los adultos puedan regresar a la legalidad y se lleven a cabo diferentes reincorporaciones individuales y colectivas.

En síntesis, se observan 6 líneas específicas objeto del requerimiento de cooperación:

- Prevención del Reclutamiento
- Promoción de la Desmovilización
- Atención Básica
- Reincorporación
- Fortalecimiento Institucional
- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

3. Fortalecimiento del Estado de Derecho

Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, la ACCI ha venido trabajando con el Ministerio del Interior y de Justicia, el DNP, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, el Consejo Superior de la Judicatura, y los organismos de control, en la elaboración de una propuesta de cooperación encaminada a apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia.

La propuesta se ha estructurado alrededor de tres ejes estratégicos en los cuales se han priorizado algunas líneas de trabajo de acuerdo con los objetivos del Gobierno Nacional:

· Transparencia: Con énfasis en materia de Prevención e Investigación y Sanción.

· Derechos Humanos: La propuesta se estructura en desarrollo de 4 líneas particulares: Descentralización de los Derechos Humanos, Cultura en Derechos Humanos, Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos y Minas Antipersonales.

· Acceso y Fortalecimiento a la Administración de Justicia y los Organismos de Control: particularmente construyendo herramientas que mejoren el acceso y la capacidad para impartir justicia.

El Presidente de la República, le ha encomendado al Vicepresidente, liderar las tareas de Gobierno dirigidas a garantizar la plenitud de los Derechos Humanos, y a mantener un diálogo permanente con el Delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hacerle seguimiento a sus recomendaciones.

**EJES DE LA PROPUESTA DE COOPERACIÓN
EN FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO**

**Transparencia: Con énfasis en
materia de Prevención e
Investigación y Sanción.**

**Derechos Humanos: La propuesta se
estructura en desarrollo de 4 líneas
particulares: Descentralización de
los Derechos Humanos, Cultura en
Derechos Humanos, Sistema
Nacional de Información en
Derechos Humanos y Minas
Antipersonales.**

**Acceso y Fortalecimiento a la
Administración de Justicia y los
Organismos de Control:
particularmente construyendo
herramientas que mejoren el acceso
y la capacidad para impartir justicia.**

4. Desarrollo Productivo y Alternativo

El Gobierno Nacional se encuentra comprometido en generar desarrollo económico y social en zonas deprimidas y de conflicto. En tal sentido, viene trabajando en la recuperación de la capacidad productiva en regiones y grupos de poblaciones excluidos y de alta vulnerabilidad.

La propuesta de cooperación en esta materia se ha estructurado en tres frentes principales:

· **Desarrollo Alternativo:** La dependencia que actualmente sufren las sociedades locales de los ingresos provenientes

de los cultivos ilícitos, ha permitido que se desarrollen procesos que atentan contra las condiciones medioambientales, el orden social, la estructura económica, la organización de la vida política y la vigencia del Estado mismo. En ese contexto, los grupos al margen de la ley encuentran un espacio adecuado para disputarle al Estado su predominancia regional, y desarrollar actividades que le permiten enriquecerse y fortalecer sus acciones depredadoras.

Para mejorar las condiciones de las sociedades locales y contribuir a la desarticulación de esta cadena de cultivos ilícitos, la línea de desarrollo alternativo busca evitar la siembra de cultivo ilegales e incentivar los legales, dándoles viabilidad económica a la producción agrícola legal, apoyándose en la economía social, y potenciando su inserción en los mercados tanto nacionales como internacionales, en una cadena no sólo de sustitución de cultivos ilícitos, sino de sustitución de ingresos, para desincentivar a los campesinos, especialmente de zonas de colonización, de sembrar cultivos ilícitos. También busca recuperar y conservar los ecosistemas afectados por estos cultivos, lo mismo que facilitar los procesos de actualización catastral en zonas donde se concentre la población de mayor productividad agrícola.

En este sentido, se busca promover la generación de alternativas económicas lícitas, a través de la constitución de incubadoras que apoyen la actividad de empresas asociadas con cultivos como madera, cacao, caucho, palma de aceite, bosques, café y otros arreglos agroforestales.

· **Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa:** En este frente se busca

generar condiciones apropiadas para el desempeño productivo de estas unidades económicas. En primer lugar, se pretende apoyar a las microempresas en mejorar su acceso a financiamiento y en fortalecer la estrategia gubernamental de promoción de minicadenas productivas. En segundo lugar, en aquellas regiones que tienen características particularmente críticas en términos sociales, económicos, políticos y ambientales, impulsar iniciativas de desarrollo económico local. En tercer lugar, fomentar la actividad de los pequeños productores agropecuarios, mediante la constitución de alianzas productivas.

• **Fortalecimiento de la capacidad comercial:** En este tema, se pretende fortalecer la capacidad del país para incluir los diferentes segmentos de la población colombiana en los beneficios de las negociaciones de libre comercio; preparar oportuna y adecuadamente a las agencias del Gobierno para asumir los retos que impone el libre comercio, no sólo en términos de su capacidad negociadora y de los compromisos y modernización institucional, sino en términos de la capacitación de los funcionarios que administrarán los diversos instrumentos; fortalecer los instrumentos de apoyo al sector productivo y desarrollar aquellos necesarios para su reconversión, con el fin de elevar a estándares internacionales la productividad, y promover la creación de nuevos sectores de base tecnológica que respondan a las demanda internacional; y fortalecer las exportaciones del país, a partir del posicionamiento regional de Colombia como proveedor importante de Centroamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y los Estados Unidos, y de una mayor expansión de sus ventas a otros mercados como los europeos y asiáticos.

5. Programas Regionales de Desarrollo y Paz

Una de las acciones del Gobierno para recuperar las condiciones de gobernabilidad y democracia, y promover la equidad social en las zonas deprimidas de conflicto, es la promoción y apoyo a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz y a los Laboratorios de Paz.⁵ Estas iniciativas comprenden escenarios de concertación regional con amplia participación social, en los que se promuevan la resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo económico y social.

Con el apoyo de la comunidad, se busca formular actividades económicamente rentables y ambientalmente sostenibles desarrolladas mediante esquemas asociativos y de economía solidaria que generen oportunidades en la región y contribuyan a la reducción de la pobreza, en particular para recuperar y/o mantener la autosuficiencia alimentaria; a desarrollar cadenas y alianzas productivas que generen valor agregado; y contribuir a mejorar la cobertura y la calidad en servicios de energía, acueducto y saneamiento básico a través de tecnologías alternativas, así como la infraestructura en salud, educación y desarrollo productivo.

Lo anterior se articula con la financiación de acciones de fortalecimiento institucional y comunitario, que apuntalen procesos de participación comunitaria de incremento de la gobernabilidad democrática, soportados en esquemas de control social y participación en los procesos de planificación territorial y profundización de la descentralización.

De igual manera, se busca siempre complementar y articular la estrategia de apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz, a los esfuerzos de inversión locales, regionales, nacional, de cooperación internacional y consolidación de alianzas Estado-sociedad civil.

6. Desplazamiento Forzoso y Asistencia Humanitaria

Bajo la dirección de la Red de Solidaridad Social, la ACCI ha venido trabajando con OCHA-ACNUR, el PNUD, la Delegación de la Comisión Europea, FORUM, y la Confederación Colombiana de ONG, en la elaboración conjunta y articulada de propuestas que contribuyan a dar solución al problema del desplazamiento en Colombia, con el fin de que las intervenciones emprendidas por la comunidad internacional y el Gobierno Nacional, respondan de manera planificada, ordenada y eficiente a las necesidades regionales en esta materia.

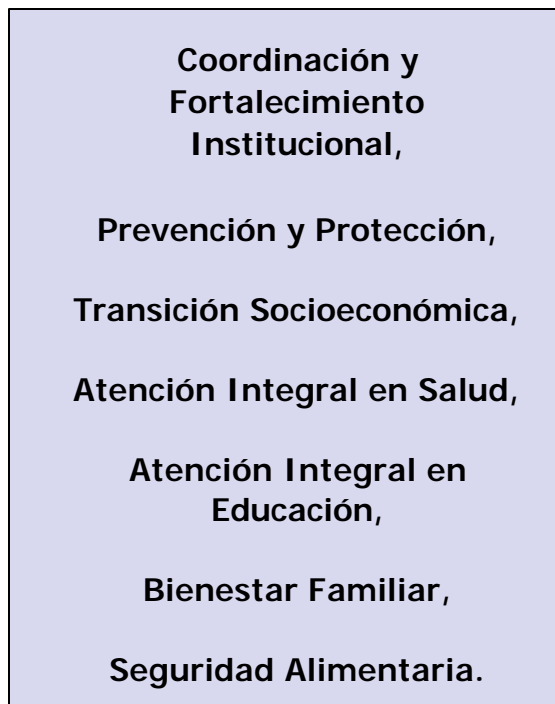
El eje central de este trabajo es el Plan de Acción Humanitaria (PAH), proceso que busca generar una mayor focalización y articulación de las acciones que Colombia y la Comunidad internacional emprenden en materia de desplazamiento.

El Plan se estructura a través de siete componentes:

- Coordinación y Fortalecimiento Institucional,
- Prevención y Protección,
- Transición Socioeconómica,
- Atención Integral en Salud,
- Atención Integral en Educación,
- Bienestar Familiar
- Seguridad Alimentaria.

En la actualidad, la ACCI y la RSS (Red de Solidaridad Social) vienen trabajando en la adaptación del PAH como una propuesta de país, a través de la realización de talleres con representantes de la Sociedad Civil, del Gobierno, del Sistema de Naciones Unidas y algunas fuentes de cooperación. Los talleres han permitido identificar las acciones y proyectos en curso y reconocer las necesidades y demandas de la población que viene siendo víctima de la crisis humanitaria existente en el país.

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN HUMANITARIA



d. Un Llamado a la Comunidad Internacional

En estricta aplicación de un esquema de corresponsabilidad, basado en la reciprocidad y la equidad, al igual que en la solidaridad entre las naciones, el Estado colombiano, en representación del compromiso asumido por todos los sectores de la sociedad y expresado mediante herramientas de democracia participativa, confía en que la comunidad internacional valorará, aun más que en el pasado, tanto los esfuerzos como la difícil amenaza que caracterizan su situación.

Colombia requiere total apoyo político, técnico y económico, que implica el contar con aliados para que se conozca nuestra verdad y se detenga la deformación de nuestra realidad frente a la opinión pública mundial. El llamamiento a la cooperación se entiende dentro de la estrategia del Gobierno y el Plan de Nacional Desarrollo, sin perjuicio de que los acontecimientos generen nuevas áreas de acción, énfasis, iniciativas populares, o de los cooperantes.

La sociedad Colombiana espera un importante apoyo y trabajo conjunto en la formulación y ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo de las propuestas específicas que se plantean, a través del empleo creativo de diversas modalidades de cooperación internacional. El apoyo a que aspira se extiende a canjes de deuda, a la ampliación del comercio para nuestros productos y a la inversión privada -comercio e inversión justos.

Con la certeza de que seguiremos contando con el apoyo serio y decidido de la comunidad internacional, reafirmamos nuestra invitación a

afianzar los procesos de coordinación y programación conjunta de la cooperación, a reorientarla hacia los ejes priorizados y previamente concertados; y a incrementarla⁶ para acompañar el esfuerzo que el pueblo colombiano y sus instituciones vienen haciendo para cumplir con los propósitos ya expuestos.

En el futuro inmediato daremos continuidad a los procesos de discusión y construcción conjunta Gobierno – Sociedad Civil – Cooperantes, para profundizar en esta propuesta que hoy se formaliza, con el propósito de lograr pronto acuerdos y decisiones de nuevos aportes y nuevas acciones que respondan a este proceso de cooperación.

Así mismo, esperamos recoger y anunciar al mundo los frutos de este esfuerzo de concertación y construcción conjunta, en la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia en el segundo semestre del 2004.



5. Estas iniciativas se adelantan en el marco de la Red Nacional de Programas de Desarrollo Integral y Paz, con el apoyo del Gobierno Nacional, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

6. Durante el año 2003, se registró un monto aproximado de cooperación internacional de USD 260 millones (como se ha reiterado en este documento esta cifra no incluye la cooperación de Estados Unidos y otros países contra el narcotráfico), cifra que se aspira incrementar en los próximos años.

V. DECLARACIÓN DE LONDRES

El día 10 de julio de 2003, se reunieron en Londres altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América y de la Comisión Europea, la ONU y sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento - CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Fondo Monetario Internacional - FMI y Banco Mundial para examinar la situación en Colombia. Todos los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su firme apoyo político al Gobierno de Colombia y a sus esfuerzos por dar solución a las amenazas a la democracia, al terrorismo creciente, al narcotráfico, a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la seria crisis humanitaria del país.

La reunión fue inaugurada por Bill Rammell, parlamentario británico y ministro encargado de las relaciones con América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido.

Participaron en la reunión el Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, quienes presentaron la estrategia y la visión de su Gobierno de cara al futuro. Los participantes acogieron favorablemente y tomaron nota de los puntos de vista de la sociedad civil, presentados por ABColombia y un representante de la sociedad civil colombiana .

Todos los representantes gubernamentales presentes expresaron su pleno apoyo al democráticamente elegido Gobierno de

Colombia y a todos sus esfuerzos por introducir las instituciones plenamente funcionales de un Estado democrático en todo su territorio, sobre la base del respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y del bienestar y seguridad de todos los ciudadanos, y por reformar las instituciones del país. También expresaron su apoyo al Gobierno de Colombia en su lucha contra la violencia relacionada con conflictos y contra el cultivo y tráfico ilegales en narcóticos, insistiendo, al mismo tiempo, sobre la necesidad de respetar el imperio de la ley, los derechos humanos y, cuando tenga aplicación, el derecho internacional humanitario .

Reconocieron el empeño del Presidente Uribe por encontrar una solución negociada al conflicto interno del país, con inclusión de los contactos directos con los grupos armados ilegales que estén dispuestos a negociar un acuerdo de paz. Se subrayó, a este respecto, la importancia de la aportación de la ONU, se ofreció pleno y continuado apoyo a la oficina del Secretario General de la ONU y agradecieron la contribución realizada por el Asesor especial del Secretario General de la ONU para Colombia.

Manifestaron estar dispuestos a prestar asistencia práctica al Gobierno de Colombia y a las Naciones Unidas, en sus esfuerzos a favor de la paz e hicieron un llamamiento a todos los grupos armados ilegales para que acordaran un cese de las hostilidades y participaran en un serio proceso de negociación, que hiciera posible una solución pacífica al conflicto. Condenaron todo acto de violencia, contra la población civil y contra sus representantes elegidos y pidieron la puesta en libertad de las víctimas secuestradas y el fin del narcotráfico.

Además de expresar su profunda preocupación por la crisis humanitaria experimentada por el país y, en particular, por la suerte de las personas internamente desplazadas y por la grave situación de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Reiteraron su firme apoyo a la labor llevada a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Tomaron nota con satisfacción de la promesa del Gobierno de Colombia de llevar a la práctica las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y apremiaron al Gobierno para que aplicara estas recomendaciones puntualmente y para que adoptara medidas eficaces contra la impunidad y la connivencia, especialmente con los grupos paramilitares.

La reunión mostró su beneplácito con los esfuerzos del Presidente Uribe para llevar a cabo la reforma de las instituciones colombianas, con vistas a conseguir un Estado democrático plenamente funcional en todo su territorio, sobre la base del imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, la reforma económica y social y un desarrollo económico sostenible. Se insistió sobre la importancia de dichas medidas - particularmente, en las zonas rurales que han tenido que sufrir de manera más acuciante el conflicto - para la consecución de una solución pacífica. Tomaron nota del papel significativo que podía desempeñar el sector privado en hacer frente a algunos de estos retos.

Manifestaron su satisfacción con la declaración del Gobierno de Colombia de que reconocía y prestaba su apoyo al papel de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales como importantes participantes en la puesta en

práctica de las reformas, en la aplicación de los programas de desarrollo y defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos por conseguir un acuerdo negociado del conflicto interno armado. También acogieron con agrado e insistieron sobre la importancia de la promesa del Gobierno de Colombia de proteger a los líderes de la sociedad civil, con inclusión de los líderes sindicales, que han sufrido amenazas contra sus personas y contra sus familias.

Finalmente, los participantes en la reunión decidieron llevar a cabo una revisión y reorientación de sus programas de cooperación y poner un énfasis particular en contribuir al fortalecimiento de las instituciones estatales, al alivio de la crisis humanitaria, la protección de los derechos humanos y de las actividades ambientales y a la creación de alternativas a la producción de narcóticos. Tras haber tomado nota de las prioridades del Gobierno de Colombia en estas esferas, convinieron en estudiar la manera de conseguir que sus programas de cooperación resultaran más eficaces, a la luz de la situación actual en Colombia, con vistas a la organización por parte del Banco Interamericano de Desarrollo de una conferencia de coordinación de donantes, en una fecha que resulte oportuna para el Gobierno de Colombia y para la comunidad de los donantes. ◆◆◆

The purpose of this document is to explain the international cooperation strategy of President Álvaro Uribe Vélez' government, which is based on the National Development Plan "Towards a Community State", and the objectives that compose it: to provide democratic security, to renew the public administration and to promote economic recovery and social equality; also, to summon the international community to strengthen the international coalition that has been working for peace in Colombia, through the firm and concrete support of the cooperation proposal detailed in this document.

For this effect the document presents, firstly, a brief diagnosis of the violence and poverty situation in the country; secondly, the role that the international cooperation has had through recent years in the solution of these problems, background which has been taken into account for the formulation of the present strategy; following, the main objectives of the National Development Plan are described, based on which a cooperation proposal is submitted to the donors community, a proposal directed towards the improvement of the living conditions of the less favored social collectives, as well as

of those collectives most affected by violence, emphasizing the great national effort exerted towards the achievement of these goals, and the related main results obtained up to December 2003.

Lastly, this document presents the general directives that the Colombian government has established from the beginning of its mandate in the subject international cooperation, with emphasis on the topics presented upon the Interamerican Development Bank - IADB meeting in Milan, 2003, as preparatory for the meeting of donors and coordination for the International cooperation, celebrated in London, Julio 10th., some year, an in six topics prioritized and agreed in the frame of this meeting that has become in the colombian proposal to the international community to direct the cooperation in the country. | ◆◆

I. INTRODUCTION

Until the beginning of this decade Colombia had evidenced an increased in violence which has also shifted territory as a consequence of the growing association between outlaw armed groups and producers and marketers of illegal drugs and common delinquents, added to the state's limitations and weaknesses in preventing and controlling the impact caused by such activities.

The links between irregular outlawed armed groups and drug traffickers, besides accelerating the growth of the areas affected by illicit crops, provided jointly with the dreaded industry of kidnapping, an abundant and stable financial source, which has allowed those groups to increase their number and to expand their military activities.


Violence became the main obstacle to economic and social development of the country, and has caused great destruction of human and social capital, and a preoccupying emigration. Its increase continuously affected the economy's productivity, and at the same time reducing the state's capability to counter the growing poverty and inequity suffered by millions of Colombians. Likewise, violence has limited the development of political and social organizations, and has become the major barrier to the democratization process.

The activities of the violent groups have also become nowadays the main obstacle to human

development. Among its victims there are displaced populations, and vulnerable groups such as the young ones under 18 years of age, who are subject to illegal group recruitment. Indigenous and afrocolombian communities, political minorities, union and social movements, town mayors, council members, former army combatants, teachers, human right advocates, health personnel and civil populations in armed confrontation areas, are also severely affected.

For the government, it is clear that the recovery of the affected and depressed regions implies much more than to develop emergency programs. A process of institutional strengthening which will allow to rebuild the state-community relationships, to create the bases for the reconstruction of the social web and the recovery of a development dynamics, to reverse the environmental damage and to recover the culture of peaceful coexistence is required.

The Colombian government has assumed the challenges imposed by this context with responsibility and determination. But it is also conscious that the efforts of society and the government will not be sufficient if Colombia cannot count on the decisive support from the international community, under the principles of corresponsibility and solidarity among the nations that direct the international agenda.

With a genuine interest in strengthening an International Coalition for Peace in Colombia, this document presents a proposal to facilitate the generation of higher cooperation levels towards the country, as well as to maximize the coordination, articulation and work of the partners with the cooperating sources, so that the international support may become the complement and support needed to overcome the structural problems faced by the nation. 

II. BACKGROUND OF INTERNATIONAL COOPERATION IN COLOMBIA

The Official Development Assistance in Colombia begins in the fifties with the Interamerican Treaty of Reciprocal Assistance – ITRA, and in the sixties with the Alliance for Progress and the World Bank's Colombia Mission.

The First Bilateral Cooperation Agreement began in 1962 with the United States and in 1968 is created the National Planning Department, and within its structure, the Special Division of International Technical Cooperation, as entity in charge of coordination at national field. Additionally, in 1992, by decree 2126, the International Cooperation Directorate of the Foreign Ministry is created, charged with the task of directing policy in the matter of International Cooperation.

In 1966 the Colombian Agency for the International Cooperation was established, being now an entity attached of the Presidency of the Republic.

Colombia understands international cooperation under the concept of “sustainable human development” which encompasses the concepts of human and social capital, the promotion of development, the participation of the civil community and the protection of the environment.

The objectives of international cooperation in Colombia are conducted under the principles of the Development Assistance Committee, DAC, of the Organization for Economic Cooperation

and Development, OECD, fostering the partnership, program conformation, the evaluation and follow-up of projects and programs, national coordination and the ownership.

It is worthwhile mentioning that the actions of The Official Development Assistance in Colombia during the 80's was characterized by relatively constant low levels averaging close to 60 million per year. (This figure, and others in this document, do not include aid received by the country from the international community for the purpose of strengthening the police and the military.)

During that period and the beginning of the 90's, several worldwide or national strategies were implemented, among them, the Forestal Action Plan for Colombia- FAPC, the Potable and Sewage Waters Program, the Environmental Plan for Colombia, the developments of the Rio '92 Summit (GEF, Global Environmental Facility, the Montreal Protocol, Ramsar, Sustainable Development Summit), the Pacific Plan and the activities related to the Fifth Centennial celebration.

On President Virgilio Barco Vargas' initiative, and conducted during President Gaviria's government, and to mitigate the effects of the war on drugs, the Special Plan for Cooperation for Colombia was presented before the international community. This program, conformed by close to 120 projects created by public and private entities, distributed in 9 areas, was supported in its design by the UNDP and submitted to the cooperating sources in 1989, brought about an increase in cooperation levels of close to 50% per year.

In the 90's, Colombia was classified as a country with medium development, as a result, it was no longer a priority country for development cooperation. However, the international community continues to decisively support Colombia's efforts to counter the effects generated by violence, the production and traffic of illegal drugs, the human rights infringement, and the environmental deterioration.

During the government of President Andrés Pastrana, the execution of Plan Colombia began. This is an integral strategy designed for the medium and long range consolidation of reconciliation, peace and social development conditions, through the implementation of four complementary components: (1) An Armed Conflict Negotiation Process; (2) Antidrug Strategy; (3) Economic and Social Recovery; and (4) Institutional Strengthening and Social Development.

For the execution of Plan Colombia, resources of close to US \$ 7,500 million, US \$ 4,000 million of which would be the national contribution and US \$ 3,500 million were expected from contributions from the international community. Up to December 2002, US \$ 5,610 million had been pledged, representing 75% of the budgeted amount. Of these last resources, US \$ 3,981 million correspond to the Colombian fiscal effort and the remaining US \$ 1,628 million correspond to international community non-reimbursable contributions.¹

It must be mentioned that for the development of the fourth component "Institutional Strengthening and Social Development" the Colombian government had the technical assistance of the Inter-American Development Bank within the framework of Peace Process

Support Group that met successively in Madrid (July 7, 2000), Bogotá (October 24, 2000) and Brussels (April 30, 2001). After conducting these three meetings, the announcements made by the international community in support to the Colombian government reached US \$ 1,340.5 million.

From the total of these resources, US \$ 690.6 million corresponded to non-reimbursable cooperation, that is, 51.5 % of the announced total. Specifically, the United States announced US \$ 370 million dollars of non-reimbursable cooperation, 53.5 % of the total amount announced as cooperation². The European Union Commission and its member states announced US \$ 227.2 million, 33 % of the total.

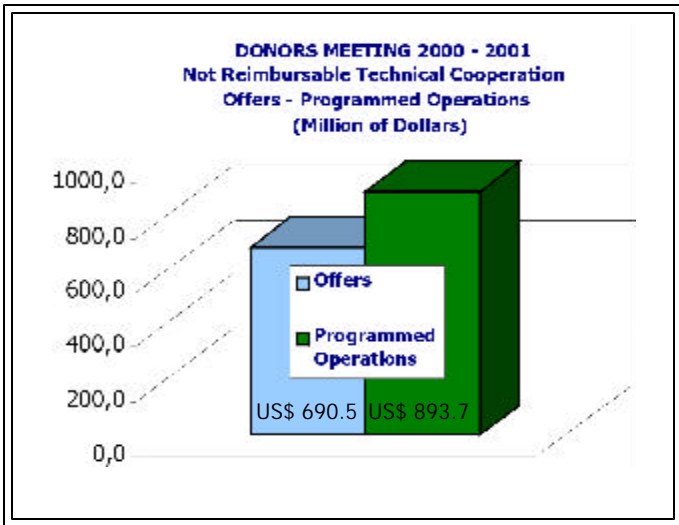


The remaining resources, amounting to about US \$ 650 million, corresponded to loan offered by different governments and multilateral organizations, constituting 48.5% of total announcements.

It must be explained, that the majority of the countries programmed their announcements through their regular cooperation during this

1. Source: Plan Colombia Balance 1999-2003 - National Planning Department, DNP.

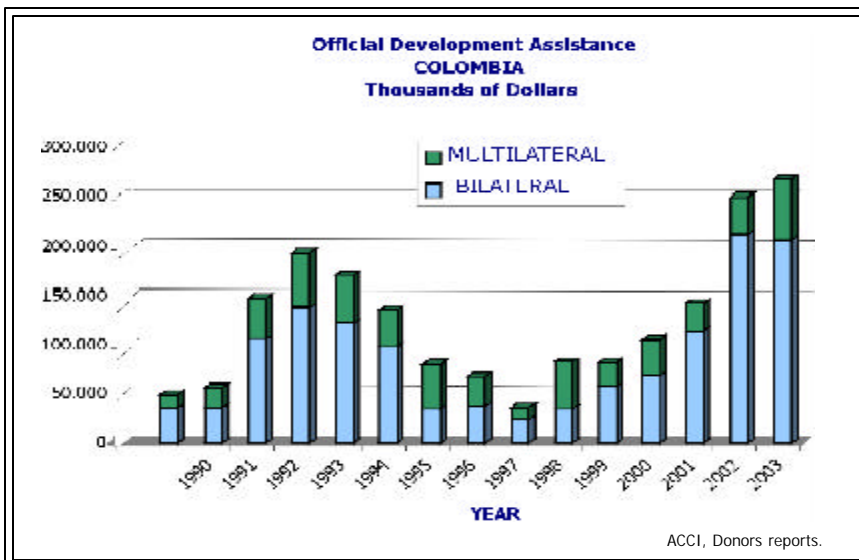
2. This amount does not include United States' support for War on Drugs.



Additionally, the National Government considers that international cooperation is an instrument for enhancing international relationships between Colombia and developing countries, and for this reason, special attention has been directed towards horizontal cooperation, which pretends to take advantage of our experience in finding solutions to common problems in the developing world and to enhance the technical capacity of the national institutions. ◆◆◆

period, in either one of two modes: jointly defined with the government through combined commissions or negotiation meetings, or directly programmed by each donor through Non Governmental Organizations.

According to the figures reported by the countries and international organizations in 2001, actual disbursements increased 36% with respect to the previous year, and in 2002 they increased 74% with respect to 2001; in 2003 the increased was 7% with respect to 2002. This is explained by the initiation of programs with the United States and the European Union.



III. THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 2002 - 2006:
«TOWARDS A COMMUNITARY STATE»

Through the National Development Plan of the Colombian Government seeks to build a “Communitary State”, conceived as a participatory state that involves the community in the attainment of the social goals; a managing state which invests public resources with efficiency and austerity; and a decentralized state that privileges regional autonomy with transparentness, political responsibility and community participation.

The Communitary State does not tolerate corruption, it does not coexist with violence, whatever its goal may be. It conducts social investment with results, and promotes solidarity in public and private decisions. It drives the creation of a country of owners, where all can be owners of their home and their destiny. It seeks that public investment may conduct to the generation of productive employment, and works towards the elimination of excessive bureaucracy and dishonest politics.

To advance in the building of this State, the Development Plan and the efforts of the National Government are directed towards three fundamental objectives:

A. TO PROVIDE DEMOCRATIC SECURITY:

For President Uribe's government, without security there is no democracy, nor growth or equity. Without security, the State cannot advance in its strengthening and restoration. For the objective of defending the democratic order and the Law State of of guaranteeing, the security and freedom of the population, of protecting human rights an to impel economic prosperity and social equity, the National

Government has implemented an integral model of Democratic Security which may permit the State to recover it's authority and it's control of the territory with legitimacy, legality and governability criteria.

The Democratic Security consists of the deployment of an effective authority that follows the rules, restrains and deters the violent ones, and is committed to the respect of human rights and the protection and promotion of values, plurality and democratic institutions. Understood this way, the Democratic Security transcends the traditional concept of security linked exclusively to the capacity of the State to thwart and penalize those individuals that transgress the norms of coexistence in society. Ultimately, the policy of Defense and Democratic Security seeks the construction of a social order that protects and benefits all its citizens in their various environments, that assures the viability of democracy and that enhances the State's legitimacy.

The security will be democratic to protect everybody: the worker, the entrepreneur, the peasant, the union leader, the newsperson, the teacher, from any aggressor.

The violence exerted by criminal organizations of all natures, is the main challenge that Colombia faces. The succession of homicides and kidnappings, the repetition of terrorist acts and the abundance of illicit businesses have become not only an obstacle for economic growth, but also a menace to the nation's viability.

Between 1990 and 2000, the subversive groups have doubled their number of men. Violence has

become the main hurdle to the economic and social development of the country, and has caused major destruction of human and social capital, and a preoccupying emigration. Its increase has negatively affected over and over the economy's productivity.

Thus, the President Uribe's government considers that without security there will be no prosperity, there will be no peacefulness, and that there cannot be any future.

To protect the population, to secure the economic infrastructure and the national roads network, to restore the authority of democratic institutions, and to generate conditions for sustainable development in the nation's territory, the Democratic Security proposes an integral and joint intervention of the State, with the concurrence of society, through which to contain, dismantle and thwart illegal armed organizations, and to form a virtuous long lasting and nationwide recovery circle to maintain and consolidate the territory's control.

The results in 2003 confirm that conditions are given for a favorable change in the country's situation:

- Some achievements were: a 26% reduction of kidnappings, a 45% reduction of illegal roadblocks, and of 23% of homicides – the lowest rate in the last 15 years. Terrorist attacks fell 49% and attacks on townships were 83% lower. Everyday more and more men and women, dejected by the abuse they have to suffer in them, and for their criminalization, abandon the terrorist organizations. Close to 4,125 men and women have already deserted, a figure higher to those of previous years and even to those reached with the demobilization resulting from peace processes at the beginning of the

previous decade.

- It is worthwhile to mention that all actions conducted to recover security have been done in full compliance of Human Rights and International Humanitarian Rights. The Government has invested important efforts for the strengthening of institutionalize and actions tending to avoid new infringements to the human rights of the Colombian population. Among other examples, in November 2002 the Inter-institutional Committee for Early Warnings was created, to centralize the government's response and to implement and make effective the Early Warning System. The committee has received, processed and handled 89 risk reports on over 150 municipalities; of said reports, 38 reports have been deemed early warnings.

The largest resource allocation in history, 34,000 million pesos, has taken place for the protection of human rights advocates. The National Program for Action Against Antipersonnel Mines was put under way.

ADVANCES 2003

A 26% reduction of kidnappings, a 45% reduction of illegal roadblocks, and of 23% of homicides – the lowest rate in the last 15 years.

Terrorist attacks fell 49% and attacks on townships were 83% lower.

The monthly average of displaced families was reduced 50% in 2003; 11.143 displaced families returned to their places of origin between August 2002 and December 2003, and in the same period humanitarian assistance has been provided to 46,328 families. The national government has given emphasis to the reconstruction of municipalities and dwellings affected by terrorist attacks, works have been completed in 129 municipalities and 5,857 dwellings have been rebuilt.

Although the assassination of union leaders and members is still a serious matter, it has decreased by 68%. Actions towards the prevention of human rights violations have been enhanced through the execution of a decentralization project in 16 municipalities and the adoption of new measures following Defense Ministry's Directive 09, related to the assistance and protection to human rights advocates and union members.

The results in the war against illicit drugs have been very positive also. In this Administration's first year, an important reduction of illicit crops in the national territory has been achieved, cocaine seizures increased (109 tons) and the seizures of raw material for this alkaloid's processing also increased, 40% in the case of liquids and 60% for solids. Additionally, the new property extinction Act permits the attack on drug trafficking organizations' most vulnerable point: their finances and possessions.

Without doubt, the Government's strong decision has been backed in its development with wide support from international cooperation, as well as every day higher citizens participation, whose longing for a radical change in the matter of security has constituted a decisive factor for the

achievement of the important results registered within this period.

ADVANCES 2003

The monthly average of displaced families was reduced 50% in 2003; 11.143 displaced families returned to their places of origin between August 2002 and December 2003.

Humanitarian assistance has been provided to 46,328 families.

Works have been completed in 129 municipalities and 5,857 dwellings have been rebuilt.

B. PUBLIC ADMINISTRATION RENEWAL

President Uribe's Government is working in a policy that seeks to increase the State's efficiency and transparentness through the enhancement of citizen's participation in the definition, execution and vigilance of public tasks.

For this purpose, modern management concepts and practices have been incorporated to public entities' management. At the same time, some of these entities have been redesigned, and traverse reforms have taken place in all of them. On the other hand, the decentralization of regional and local entities has advanced, in order to achieve greater and more effective levels of territorial autonomy and greater governability.

Colombia requires democratic security, to grow again, to generate new jobs and to obtain fairer distribution of the yields of growth. For this to be possible, a profound renewal of the State is required. This implies the need for an integral political and justice reform, and an Administrative renewal, conceived as a long reaching project.

The program does not escape the Community State postulates, understood as the State at the service of the citizen; thus, the program spins off from concepts such as a new public administration culture (a managing, productive, austere State) in which the citizens' participation is required for the definition, execution and vigilance of the public tasks, and where the decentralization becomes the corner stone, for the territorial entities' capacity to assume, in the most adequate manner, the functions due, avoiding the duplication of efforts between the central government and the territorial entities.

The Public Administration Renewal Program (PARP) is directed to all executive branch entities of national order through the execution of vertical and transverse reforms.

The first type of reforms has to do with the actions that each Ministry or executive branch entity of national order adopts in its interior, and the second type are of multi-sector scope, that is, they include all Ministries and all entities, and their objective is to overcome, or at least to establish irreversible bases for the overcoming, some structural problems affecting the public administration.

At the end of 2003, the execution of the vertical reforms, redesign actions have been taken in 89 entities (fusion, suppression, spin-offs, restructuring, and attachment changes.) The

decrees ruling these changes have been issued already, and upon completion of their execution, the changes will produce gross savings, before employees' liquidation, indemnity settlements and economic recognition, of 480.614 million pesos for the quadrennium; 17,223 jobs will be suppressed, of which 11,482 will correspond to eliminated positions and 5,741 to service performance contracts.

Operations following these decision have been executed until now representing gross savings to the National Budget (before indemnity payments and economic recognition) of 234,513 million pesos and a total of 8,711 job positions less.

It is the policy of the current government to implement "reforms with social sense", and for this reason the Public Administration Renewal Program has developed a strategy to mitigate the program's social cost, the Social Protection Plan (SPP).

The Social Protection Plan consists of the implementation and follow-up of these programs:

- a) Economic Recognition
- b) Social Roadblock
- c) Programs for the Improvement of Labor Competencies, which include:
 - Psychosocial orientation and work competence evaluation
 - Training
 - Intermediation, and
 - Self-employment

The SPP designed by the government to accompany the renewal process has guaranteed job stability to 10,947 public servants

beneficiaries of the “social roadblock” in this way: 4,425 mothers head of family, 348 handicapped and 6,174 individuals close to retirement. Of the total of public servants let go through these reforms, 1,821 have joined the programs designed by the government to assure their technical or professional rehabilitation.

The cost of maintaining the “social roadblock” in entities with accomplished facts is 126.028 million pesos.

Concerning structural or transverse reforms, the PARP selected 11 themes that have been executed parallel to the vertical reforms, and these are:

- Public employment
- Asset management
- National Judiciary Strategy
- Budgetary system
- Management by results
- Electronic government
- Public Contracting System
- Information Systems
- Internal Controls
- Procedures reduction strategy; and
- Regulation, supervision and control

During the execution of these reforms, their goals and objectives have been defined and strategies have been initiated, such as the submittal of bills for public employment reform, public contracting reform, the preparation and approval of four CONPES documents related to public employment, asset management, national judiciary strategy and budgetary system, all of the published in the National Planning Department’s Web Page, and the same applies to the regulation and control conceptual framework.

The execution of the objectives for each theme and the definition of a policy framework to allow the overcoming of the structural problems found in the corresponding area have experienced good progress.

Differently from the vertical reforms, all transverse reforms are long-range in nature, and for this reason the definition of accomplished facts is also of long-range nature. In some cases, it is even foreseen that they might even exceed this government’s term, but it is expected that the bases established by the PARP will be solid enough to be able to maintain their achievements through time.

ADVANCES 2003

The Social Protection Plan designed by the government to accompany the renewal process has guaranteed job stability to 10,947 public servants beneficiaries of the “social roadblock” in this way: 4,425 mothers head of family, 348 handicapped and 6,174 individuals close to retirement.

C. ECONOMIC REACTIVATION AND SOCIAL EQUALITY

The government has been pushing for sustainable economic growth and job creation under a guaranteed macroeconomic stability environment. To warrant the sustainability of the public debt and adequate access of the Colombian economy to international financial and goods and services markets.

Thus, the promotion of home and general building programs, the development of physical infrastructure investment, and mining and hydrocarbon exploration and production. On the other hand, and for the purpose of securing the sustainability of growth, the government has taken actions for the promotion of science, technology and research. Also, the government has implemented policy for the encouragement of national industry productivity and competitiveness.

The government is committed to an integral social strategy that should lead to the construction of a more equitable society, in a nation with 27 million persons in conditions on poverty. For this purpose, the government is implementing the Social Reactivation Plan, through which it purports to make the State's social policy a reality, and to establish the bases for a more equitable society. This plan consists of seven tools: 1- Educational revolution 2- Social protection and security 3- Promotion of cooperative economy 4- Social management of land 5- Social management of public utilities 6- Achieve a country of "owners" 7- Quality Urban Life.

Thanks to this government's decision, at the end of 2003 important results have been obtained: In matters of education, the coverage and quality of basic and middle school was widened; 477,598 new openings imply an increase of the gross coverage from 83.2% to 86.3% in 2002 and 2003, representing 31% of the total governmental goal. Additionally, 34,858 new openings have been created for higher education, 1,042,058 tests have been administered to measure the quality of education imparted in 1,065 municipalities and 95 musical bands have been created, reactivated and strengthened, and 5,000 displaced children have been signed up to the Children Orchestras *Batuta* Program.

ADVANCES 2003

In matters of education, the coverage and quality of basic and middle school was widened; 477,598 new openings imply an increase of the gross coverage from 83.2% to 86.3% in 2002 and 2003, representing 31% of the total governmental goal.

Regarding the coverage of the social protection programs for the most vulnerable sectors of the population, a significant increase has been registered. The unemployment rate has decreased from 14.7% in October 2002 to 13.6% in October 2003, and more than 650,000 new jobs were created in 2003. More than a million persons joined the subsidized health program, for a current total of 11,722,200 participants of the 13,600,000 goal for 2006. The contributive health program reached coverage for 13,459,179 participants, 337,414 Families in Action program subsidies were handed out to

level 1 SISBEN homes, for the purpose of improving school attendance and retention and child nutrition, thus surpassing the quadrennium goal of 325,000 families.

The building of a cooperative economy had major advances: Currently 5,226 "community mothers" (8% of the goal for 2003-2006) are in the process of induction to cooperativism. 5,434 micro-entrepreneurs of the 10,345 that according to plans will be trained until 2006, in 25 mini-productive chains, have benefited from credits amounting to 7,469 million pesos. In 2003, through associative credit for the country, 19,536 small producers were benefited. In farming, 159,000 hectares have been recovered or incorporated to production. 9,370 subsidies for building and improvement of rural homes have been granted, and contracts for the recovery and conservation of tropical ecosystems benefiting 20,000 families of the 50,000 families that the national government intends to incorporate and benefit.



In spite of the great efforts and the recent measures decreed to increase fiscal revenue – through adjustment policies, newer and higher taxes, operation expenses reduction policies and social expenditures focalization- the Colombian State does not have enough resources to develop all the proposed objectives. Therefore, the international community's understanding and its decisive commitment is required to broaden its support to complement the national effort in the construction of the Community State according to the established priorities.

The strategy proposed in the following pages, which includes several initiatives directed towards the elimination of the impact of violence in civilian population, surpasses this government's term and is defined as a State Policy which congregates the entire Colombian population for the construction of peace. The steps already taken have been conceived as a function of an alliance between the civil population, the political participants, and the international community. ◆◆◆



IV. GENERAL ORIENTATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION

The government's strategy for international cooperation purports to strengthen the international coalition already working for peace in Colombia, to allow a better understanding and participation of the international community in the Colombian reality change processes, to improve the international cooperation received by the country, to raise the amount of resources and to widen the scope of the international assistance received, whilst making it complementary to other forms of support and financing for development, such as fair commerce and investment, the reduction of warning for tourists visiting the country, and visa approvals, among others.

This strategy has as a final goal the search for peace, the strengthening of both the State and civil society, sustainable human development, and humanitarian assistance. The strategy is founded on the legitimate interest of the Colombian State to coordinate international assistance towards the solution of the structural problems that the nation faces, and it is directed to the advancement in three domains:

- **Quality:** The international cooperation will be focused around a set of thematic priorities, framed by the National Development Plan "Toward a Communitary State", seeking that it might be focused, agile, concrete and flexible, and with direct positive impact on the community.

- **Quantity:** Colombia requires decisive and concrete support from the international

community materialized in a raise in official cooperation according to the difficult situation and the complexity of the nation's challenges and to the government's efforts in favor of development and peace.

- **Articulation with the Private Sector:** The official development assistance received by the country must leverage other kinds of financing and support such as investment and fair trade, tourism and the cooperation of private sector foundations. It is the intention to potentiate the role of the Colombian private sector, characterized by its ample support to development, in both its investment in productive sectors and its philanthropic contributions, for more than forty years, the highest in Latin America in relative terms. Thus, to count with the accumulated experience of Colombian businesses' philanthropy is fundamental piece for the execution of international cooperation in Colombia.

Over the basis of the priorities defined in the National Development Plan, President Uribe provided the international community, at the beginning of his administration, a cooperation proposal directed to improve the living conditions of the less favored persons, as well as of those heavily affected by violence.

In that sense, the President indicated several action lines, and invited international cooperation to concentrate on them. It was with that intent that the Colombian Government presented at the Annual Inter-American Development Bank Meeting in Milan, in March 2003, some of this lines:

- Forest Ranger families
- Micro-credit Program
- National Reading and Library Program

- National Program of Music for Coexistence
- Humanitarian Assistance Program

production of illegal drugs.”

After taking careful notice of the government’s priorities in these areas, they “agreed to study how to make their cooperation programs more effective, in light of Colombia’s current situation, for the purpose of conducting another donors conference meeting at a date convenient for the Colombian government and for the donors’ community.”

Nonetheless, these initiatives did not fulfill the donor countries’ expectations, and the government started a concerting process in order to achieve the consolidation of a strategy which, in addition to responding to national needs, would encounter favorable response from the international community.

a. Preparatory Meeting of the Coordination and International Cooperation Board.

During the Preparatory Meeting of the Coordination and International Cooperation Board for Colombia held in London on July 10, 2003, the Colombian government presented the document “An International Coalition for Peace in Colombia”.

Within this meeting’s framework, all governmental representatives “manifested their support to the Government of Colombia in its fight against conflict related violence and against the production and trafficking of illegal drugs, underscoring the need to do so observing the concept of “State under the Law”, human rights, and, where applicable, international humanitarian rights.”

As a result of this encounter, they “agreed to review and redirect their cooperation programs, placing particular emphasis, of contributing to the strengthening of state institutions, the relief of the humanitarian crisis, the protection of human rights and of environmental activities and to the development of alternatives to the

b. Post - London Plan

As a consequence of the Preparatory London meeting, the international community committed itself to review and redirect their cooperation programs looking forward to the Coordination and Cooperation Board Meeting.

In a first phase, actions are taking place for the purpose of organizing the demands for cooperation with the participation of the corresponding national entities, the generation of dialogue and concerting spaces with the civil community and with the diplomatic representatives accredited in Colombia. The result of this work are the proposals documents for each of the defined thematic axes:

- Forests,
- Peace and reincorporation,
- Alternate and productive development,
- Strengthening of the Law State ,
- Regional development and peace programs, and
- Forced population displacement and Humanitarian assistance

Acting proactively, the diplomatic corps accredited in Colombia, has generated an

important coordination and articulation dynamics as a result of the London meeting, which has facilitated periodic and constructive interlocution with national authorities. A group called the G-24 has been created, conformed by representatives of all the governments and cooperation agencies which participated in the London Meeting³, and this group, in turn, has created a technical group denominated the G-10⁴

The Interamerican Development Bank is performing the Technical Secretariat for the preparation, execution and follow-up for the Board. Among other aspects, the IADB has offered a team of experts to accompany the government in the preparation of the programmatic proposals that will be presented to the international community.

c. The Prioritized Thematic Axes

In the document “An International Coalition for Peace in Colombia”, presented at the London’s meeting, the Colombian government proposed to the international community seven priority cooperation areas for the country under the light of the objectives set in the National Development Plan and around which the international Coordination and Cooperation Board would be conducted.

After several consultations with national entities and cooperating sources, the Colombian request

3. Argentina, Austria, Brazil, Belgium, Canada, Chile, Denmark, Spain, United States, Finland, France, Germany, Greece, United Kingdom, Italy, Ireland, Japan, Luxemburg, Mexico, Noruega, Netherlands, Portugal, Sweden, Switzerland, European Comission. To know the participants in the London Meeting, see Chapter V.

4. Conformed by representatives from Sweden, Switzerland, the United States, the European union, the United Kingdom, Spain, the Netherlands, Italy, Brazil and Mexico.

at the Board has concentrated around systematic blocks which are being developed under the cooperation of the Colombian Agency for International Cooperation and the Foreign Ministry.

The purpose is that the proposals be nourished by a fluid dialogue among the different sectors of Colombian society and the territorial entities, and to do so, along with the participation of the United Nations Development Program, UNDP, the national entities maintain consultation with the social actors. This consultations’ work mechanics varies according to the thematic block.

It is worthwhile mentioning that the construction of these proposals has been directed also by the knowledge of the strategic interests of the offerers of cooperation in their traditional accompaniment of Colombia. As a matter of fact, Meetings have been held with the diplomatic corps accredited in Colombia (Ambassadors and Cooperation Agencies’ Directors), in which the work’s thematic directions and policies are discussed.

This dynamics will be permanent to achieve greater coordination and articulation with the donors, as well as the negotiation of the following programs being conducted and developed:

1. Forests

President Álvaro Uribe Vélez’s government has decided to grant more relevance to the development of the country’s forestal resources, and is committed to promote this sector as one of the pillars of the new development of the rural regions.

The government has defined its policy in this matter, oriented towards the promotion of forestal crops and protective reforestation, among some of the main aspects for the generation of employment opportunities and income for the rural population, and to secure rural populations to their territories.

The commitment of the government with all sectors involved in forestry management is oriented to consolidate Colombia as a country with forestal vocation, to promote Sustainable Forest Management (SFM) over all its territory, and to strengthen public and private entities related to such matters.

This strategy's central axis is the support and consolidation of the National Forestal Development Plan (NFDP) that incorporates the lineaments and actions consigned in the main international agreements on forests, and in particular, those reached in the framework of the United Nations Sustainable Development Commission.

The National Government has been developing the Forest Ranger Families program, the object of which is to support the families of communities located in strategic ecosystems or in areas of protection and conservation with presence of, or in risk of being affected by illicit crops so that said families can consolidate lifelong projects in accordance with the democratic principles that direct social and economic progress in Colombia, providing them with a legal income alternative. The program is centered in the design and execution of strategies associated with the productive alternate use, the protection, recovery, and/or conservation of the areas belonging to the region where said families are established, in order to create a regional development perspective.

With this program as a starting point, it is expected that the forest ranger families will not only have an income source different from that of illicit crops, but that they will also identify their territories' opportunities and productive potential, so that with the support of the international community they might start sustainable forest use and management strategies which will also contribute to the construction of social capital in these populations.

The cooperation proposal in this matter has been structured around the three NFDP thematic axes:

- Arrangement, conservation and restoration of forestal ecosystems;
- Promotion of productive forestal chains;
- Institutional development.

For such purpose, the following cooperation lines are identified:

- To support the consolidation and creation of programs addressing the improvement of the quality of life of the forests' inhabitants starting from the conservation and sustainable use of the forests. In particular, it is sought that the international technical cooperation assist in the consolidation of indigenous reservations, the Communitary property of the afrocolombian communities, and the peasants' initiative in subjects related to sustainable management of the forests.

- To support the strengthening of the management capacities of those public and private institutions' in charge of administering, conserving and promoting the use and sustainable yield of both natural and sowed forests.

- To promote the creation of financial instruments for the consolidation of the National Forestal Development Plan (NFDP) relative to the use and sustainable utilization of the natural forest, and the evaluation of environmental services, including CO2 capture and sustainable forest management.

- To support the consolidation of the national biodiversity strategy within the NFDP framework, especially in matters concerning the sustainable utilization of non-wood products.

- To support the formulation of a National Forestry investigation plan, with emphasis in forestal biotechnology, the genetic improvement of species, the optimization of technologies for sustainable forest utilization.

- To support the creation of a National Program for the creation of a Forestal Culture.

- To support programs directed towards small and medium enterprises to implement a technological modernization and update in the areas of wood transformation.

- To support the consolidation of the forestal information system designed to plan, direct, make decisions and formulate coherent policies which will allow the NFDP as a long range policy.

- To facilitate the development of programs for the arrangement and zoning of forestal ecosystems; the conservation and restoration of tropical forests, and the prevention and control of forest fires.

- To facilitate the interchange of experiences to simplify the development of forestal inventories, to promote the

Communitary management of forests, to consolidate entrepreneurial and top-notch technological approaches oriented towards the optimization of forest use and transformation.

**THEMATIC AXES OF COOPERATION
FOREST MATTER**

Arrangement, conservation and restoration of forestal ecosystems;

Promotion of productive forestal chains;

Institutional development.

2. Peace and Reincorporation

The National Government has been working in the implementation of a strategy directed to offering of the necessary guarantees so that outlawed armed actors demobilize and reincorporate to civilian life either individually or collectively. For that purpose, work is being conducted in the areas of interfamily violence and child abuse, seeking to warrant children and youth permanence in school attendance, the culture of peace, coexistence, reconciliation and peaceful conflict resolution is promoted. Also, actions are being taken to promote demobilization and to reconstruct the civil identity of the demobilized individual. At the same time, models of assistance and reincorporation suitable to the particularities of the target population are offered, so that it may have access to available resources from the State, and to the institutional supply of health, education and training and job and productive work creation

services. Also, pluralism and citizen participation are enhanced as determining elements for the recovery of governability and legitimization in said populations.

This proposal establishes the characteristics and particular conditions so that the international community can become active participant in the processes and programs established so that underage populations may return to legality and individual and collective reincorporations may take place.

In synthesis, there are six specific lines matter of the cooperation request:

- Prevention of illegal recruitment
- Promotion of demobilization
- Basic assistance
- Reincorporation
- Institutional Strengthening
- Follow-up, monitoring and evaluation

3. Strengthening of the Law State

Under the leadership of the republic's Vice Presidency, the Colombian Agency for International Cooperation has been working together with the Ministry of the Interior and Justice, the National Planning Department (DNP) the Presidential Program of War on Corruption, the Superior Judiciary Council, and the control organisms, in the preparation of a proposal oriented towards supporting the strengthening of a Law State.

The proposal has been structured around three strategic axes in which several lines of work have been prioritized according to the National Government's objectives:

- **Transparentness:** With emphasis in the

matters of prevention and investigation and sanctions.

- **Human Rights:** Four particular structural lines are included: Human Rights decentralization, Human Rights Culture, National Human Rights information System, and Antipersonnel Mines.

- **Access and Strengthening of Justice Administration and Control organisms:** Particularly constructing tools to improve access to and the capacity to administer justice.

The President has put in charge the Vicepresident to lead the governmental task to guaranteed the human rights and to maintain a permanent dialogue with the represent of the United Nations Office Human Rights High Comissioned, and to follow up his recomendations.

THEMATIC AXES OF COOPERATION STRENGTHENING OF THE LAW STATE

Transparentness: With emphasis in the matters of prevention and investigation and sanctions.

Human Rights: Four particular structural lines are included: Human Rights decentralization, Human rights Culture, National Human Rights information System, and Antipersonnel Mines.

Access and Strengthening of Justice Administration and Control organisms: Particularly constructing tools to improve access to and the capacity to administer justice.

4. Productive and Alternative Development

The National Government is committed to generating economic and social development in areas of conflict and depression, and it has been working in the recovery of productive capacity in regions and with excluded and highly vulnerable populations.

The cooperation proposal has been structured along three main fronts:

- **Alternative development:** The dependence on income derived from illicit crops currently experienced by local communities has allowed the development of processes that attempt against environmental conditions, social order, economic structure, the organization of political life and the existence of the State itself. In this context, the outlawed groups find space to contest the state's regional predominance and to conduct activities that allow those groups to get rich and strengthen their predatory activities.

To improve local societies' conditions and to contribute to the disarticulation of this chain of illicit crops, the alternative development line seeks to thwart the sowing of illicit crops and to reward legal ones, providing economic viability to legal agricultural production, standing on a social economy and potentiating its insertion in both domestic and foreign markets, in a chain of not only illicit crops substitution, but also of income substitution, to deter peasants from sowing illicit crops. This line also seeks to recover and conserve ecosystems that have been affected by illicit cultivation, and to facilitate the processes of real property census updating in those areas where the most productive agricultural production population is concentrated.

In this sense, the generation of licit productive alternatives is sought, through the creation of business incubators to support enterprises dedicated and associated to cultivation of produce such as wood, cocoa, rubber, oil palm, forests, coffee and other agro-forestal products.

- **Support to micro, small and medium enterprises:** This front seeks to generate adequate conditions for the productive performance of these economic units. In first place, it is intended to support micro enterprises in improving their access to financing, and to promote the government's strategy to create productive mini-chains. In second place, to promote local economic development initiatives in those regions having particularly critical characteristics in social, economic, political and environmental terms. In third place, to encourage the activity of small rural producers through the creation of productive alliances.

- **Strengthening of commercial capacity:** In this theme, the idea is to strengthen the country's capacity to include the different population segments as beneficiaries of the free trade agreements; to adequately and opportunely prepare the government's agencies to face the challenges imposed by free trade not only in terms of their negotiating capabilities and institutional modernization, but also in terms of the training of the officers who will administer the different instruments; to enhance the instruments for the support of the productive sector, and to develop those instruments required for its reconversion, to bring productivity to international levels and to promote the creation of new technology based sectors which can respond to international demand, and to enhance Colombian exports based on

Colombia's regional positioning as important supplier to central America, the Caribbean, the Andean Community, and the United States, and to originate greater expansion of the country's sales to other markets, such as the European and Asian markets.

5. Regional Development and Peace Programs

One of the government's actions for the recovery of the governability and democracy and to promote social equality in regions depressed by conflict, is the encouragement and support of the Regional Development and Peace Programs and of the Peace Labs⁵. These initiatives comprise scenarios of regional concerting with ample social participation, in which the peaceful resolution of conflicts, the protection of citizen's rights, and social and economic development may be reached.

With the community's support, the formulation of economically feasible and environmentally sustainable activities is sought. These activities will be developed through associative schemes generating opportunities in the region, contributing to the reduction of poverty, and in particular to recover and/or maintain self-sufficient nourishment; to develop chains and alliances to generate added value; and to contribute to improve the quality of service and coverage of public utilities by means of alternative technologies, and the health, education and productive development infrastructures.

The aforementioned is articulated with the financing of actions of institutional and communitary strengthening, which reinforce communitary participation in processes increasing democratic governability supported

by social control schemes and participation in the processes of territorial planning and decentralization deepening.

Likewise, it seeks to complement and articulate the Regional Development and Peace Programs support strategy to the local, regional, national, international cooperation and state-civil alliance consolidation efforts.

6. Forced Displacement and Humanitarian Assistance

Under the direction of the Social Solidarity Network, the Colombian Agency for International Cooperation has been working with the United Nations High Commissioned for Refugees, the United Nations Development Program, the European Commission Delegation, FORUM, and the Colombian NGOs Confederation, in the conjunct and articulated formulation of proposals to contribute in the solution to the displacement problem in Colombia in order to achieve that the interventions started by the international community and the National Government respond in a planned, orderly and efficient manner to the regional needs in this matter.

The central axis of this work is the Humanitarian Action Plan (HAP), a process that seeks to generate a greater focalization and articulation of the actions conducted by Colombia and the international community.

The Humanitarian Action Plan is structured around seven components:

- Institutional Coordination and Strengthening,
- Prevention and protection,
- Socio-economic transition,
- Integral health assistance,

- Integral education assistance,
- Family welfare,
- Nutritional security.

**d. A Call to the International
Community**

Currently, the Colombian Agency for International Cooperation and the Social Solidarity Network (SSNI) are working on the Humanitarian Action Plan's adaptation as a countrywide proposal, through the execution of workshops with participants from civil society, the government, the United Nations System, and some cooperation sources. The workshops have permitted the identification the actions and the recognition of the needs and demands of the population that is being subjected to the humanitarian crisis in the country.

Within the strict application of a corresponsibility scheme, based on reciprocity and equality, as well as on solidarity between nations, the Colombian State, representing the commitment assumed by all sectors of society expressed through the tools of democratic participation, trusts in that the international community will value, now even more than in the past, both the country's efforts and the difficult menace of its current situation.

Colombia requires total political, economic and technical support, which implies the need to count with allies willing to know our truth, and to stop the distortion of our reality in face of the world's public opinion. The call for cooperation must be understood within the Government's strategy and the National Development Plan, without prejudice that new happenings might generate new areas of action, emphasis, popular initiatives, or cooperators' initiatives.


Colombian society awaits an important amount of support and conjunct work in the formulation and execution of the programs and projects for the development of the specific proposals submitted herein, through the creative use of different modes of international cooperation. The expect support extends to debt exchange, to the widening of commerce for our products, and to fair private trade and investments. With the certainty that we can count on the serious and decisive support from the international community, we reaffirm our invitation to uphold the conjunct cooperation, coordination and scheduling processes, and to redirect them towards the prioritized and previously concerted axes, and to increase that

**HUMANITARIAN ACTION PLAN
COMPONENTS**

**Institutional Coordination
and Strengthening,
Prevention and protection,
Socio-economic transition,
Integral health assistance,
Integral education
assistance,
Family welfare,
Nutritional security.**

cooperation⁶ in order to accompany the Colombian people and institutions efforts to comply with the aforementioned purposes.

In the immediate future we will provide continuity to the conjunct Government –Civil society – Cooperators discussion and construction processes, to deepen this proposal formalized today, for the purpose of achieving prompt agreements and decisions to commit new contributions and actions that may respond to this cooperation process.

Likewise, we expect to collect, and to announce to the world, the fruits of this conjunct agreement and construction effort, at the International Coordination and Cooperation Board for Colombia during the second semester, 2004. 

5. These initiatives are conducted in the framework of the National Network of Regional Integral Development and Peace Programs, with the support of the National Government, the World Bank, the European Union, and the United Nations development program.

6. During 2003, international cooperation to Colombia amounted to US\$ 260 million (as it had being told before, this resources doesn't include anti-drug aid), figure that is expected to increase in future years.

V. LONDON DECLARATION

Senior representatives of the Governments of Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, the European Union, Japan, Mexico, Norway, Switzerland and the United States of America and of the European Commission, the UN and agencies, the Andean Development Corporation, Inter-American Development Bank, IMF and World Bank met in London on 10 July to discuss the situation in Colombia. All Government representatives present reaffirmed their strong political support for the Colombian Government in its efforts to address threats to democracy, terrorism, illegal drugs, human rights and international humanitarian law violations and the serious humanitarian crisis.

The meeting was opened by Bill Rammell MP, Minister responsible for relations with Latin America in the Foreign and Commonwealth Office.

The Vice President and the Foreign Minister of Colombia attended the meeting and set out their Government's strategy and vision for the future.

The meeting welcomed and acknowledged the views of civil society which were presented by ABColombia and a representative of Colombian civil society.

All Government representatives present expressed their full support for the democratically elected Colombian Government and for all efforts to develop the fully functioning institutions of a democratic state throughout its territory, based on respect for human rights and

international humanitarian law and the welfare and safety of all citizens, and to reform the country's institutions. They expressed their support for the Colombian Government in its fight against conflict-related violence and illegal drug production and trafficking, underlining the need in so doing to respect the rule of law, human rights and, when applicable, international humanitarian law.

They welcomed President Uribe's commitment to seek a negotiated solution to the internal conflict in Colombia including through direct engagement with those illegal armed groups prepared to negotiate a peace agreement. They underlined the importance of the contribution of the UN. They offered their full continuing support to the good offices of the UN Secretary-General, and thanked the Special Adviser to the UN Secretary-General on Colombia for his contribution.

They expressed their willingness to provide practical help to the Colombian Government and the UN in peace efforts. They called upon all the illegal armed groups to agree to a ceasefire and to enter a serious negotiating process to seek a peaceful solution to the conflict. They condemned all violent acts against the civilian population and elected representatives and called for the release of kidnap victims, and the halting of narcotics trafficking.

They expressed deep concern about the humanitarian crisis in Colombia, particularly the plight of internally displaced persons, as well as the grave human rights and international humanitarian law situation. They voiced their strong support for the work undertaken by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights in Colombia. They noted with satisfaction the Colombian Government's pledge to

implement the recommendations made by the UN High Commissioner for Human Rights. They urged the Colombian Government to implement these recommendations promptly and to take effective action against impunity and collusion especially with paramilitary groups.

They welcomed the efforts of President Uribe to reform Colombian institutions in order to develop a fully functioning democratic state throughout its territory, based on the rule of law, respect for human rights, the safety and welfare of its citizens, social and economic reform and sustainable economic development. They emphasised the importance of such measures, especially in rural areas that have borne the brunt of the conflict, in helping to achieve a peaceful solution. They noted the significant role which the private sector could play in meeting some of these challenges.

They welcomed the Colombian Government's statement that they recognised and supported the role of civil society and Non Governmental Organisations as important stakeholders in carrying out reform, implementing development programmes and defending human rights and moving towards a negotiated settlement of the internal armed conflict. They further welcomed and underlined the importance of the Colombian Government's pledge to protect civil society leaders, including of trade unions, who have suffered threats against themselves and their families.

Finally, they agreed to review and refocus their cooperation programmes with particular emphasis on contributing to the strengthening of state institutions, the alleviation of the humanitarian crisis, the protection of human rights, environmental activities and the

development of alternatives to drug production. Having taken careful note of the Colombian Government's priorities in these areas, they agreed to consider how to make their cooperation programmes more effective in the light of the current situation in Colombia, with a view to a donors' co-ordination conference to be organised by the Inter-American Development Bank at a date convenient to the Colombian Government and the donor community. 